

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

17ª REUNION — Continuación de la 9ª SESION ORDINARIA — SEPTIEMBRE 14 DE 1994

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri,
y Horacio Daniel Usandizaga

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavaló

DIPUTADOS PRESENTES:

ABASTO, Angel Leónidas
ACENOLAZA, Florencio
ACHEM, Antonio
ALENDE, Oscar Eduardo
ALGABA, Ernesto Pablo Andrés
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALVAREZ, Carlos Alberto
ALVAREZ, Carlos Raúl
ALVAREZ GARCÍA, Normando M.
ANTELO, José María
ARAGONES DE JUAREZ, Mercedes M.
ARANDA, Saturnino Dantti
ARIAS, César
ARMIENDARIZ, Alejandro
ARRECHUEA, José Salvador
AYALA, Susana Beatriz
AYETZ, Lillana
BALESTRA, René Helvecio
BALESTRINI, Miguel Alberto
BALTER, Carlos Mario
BARBOTTI, Adolfo Ector
BARRIONUEVO, Eduardo E.
BAUM, Daniel
BECERRA, Carlos Armando
BECERRA, Nicolás Eduardo
BENEDETTI, Jorge Enrique
BENZI, María Cristina
BERHONGARAY, Antonio Tomás
BERNARDEZ, María del Pilar
BIANCHI SILVESTRE, Marcela
BISCHOF, Enrique Alberto
BONEMI, Silvia M.
BORDA, Osvaldo
BRACCHI, Osvaldo Américo
BRANDA, Carlos Ernesto
BRAVO, Alfredo Pedro
BRESER, Adalberto Edgardo
BRUNELLI, Naldo Raúl A.
BRUZZO, Omar Odulio
BULLRICH, Patricia
BUSSI, Antonio Domingo
CABIRÓN, Juan Carlos
CALLABA, Anibal
CAMANO, Eduardo Oscar
CAMARA, Mario Angel
CAMPERO, Rodolfo Martín
CARCA, Elisa Beatriz
CASARI de ALARCIA, Leonor
CASTILLO, José Luis

CASTILLO, Oscar Anibal
CASTRO, Carlos José
CEBALLOS, Walter Alberto
CERBERA, Rogelio S.
CLOSS, Ramón A.
CORCHUELO BLASCO, José Manuel
CROSTELLI, Juan Carlos
D'ALESSANDRO, Miguel H.
D'AMBROSIO, Angel Mario
DELLA, Roberto Antonio
DEL FABRO, Lillan del Carmen
DELEFFIANT, Carlos F.
DÍAZ MARIÑEZ, Jorge R.
DIGÓN, Roberto S.
DI TULLIO, Néstor Horacio
DONNI, Luca C.
DRISALDI, María Rita
DUMÓN, José Gabriel
DURASONA Y VEDIA, Francisco de
DURNIEU, Marcela Margarita
ESPÍNEZ POERO, Guillermo E.
FABRISINI, Carlos Alberto
FALLETI, Julio César José
FAYAD, Víctor Manuel
FELGUERAS, Ricardo E.
FERNÁNDEZ GILL, Guillermo C.
FERNÁNDEZ MEJIDE, Graciela
FOLLONI, Jorge Oscar
FRAGOSO, Francisco Ulises
FUNES, Carlos Delcio
GALANTE, Pedro Jorge R.
GALVÁN, Raúl Alfredo
GALLO, Orlando Juan
GARCIA MORENO, Miguel Angel
GAUNA, Juan Octavio
GAZIA, Rodolfo M.
GIMÉNEZ, Néstor Abel
GIMÉNEZ, Ramón Francisco
GIOJA, José Luis
GOLPE, Carlos H.
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.
GONZÁLEZ, Antonio Erman
GONZÁLEZ CABANAS, Tomás W.
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan H.
GRANADOS, Dulce
GREEN, Gustavo Adolfo
GUERRERO, Luis Serafin
HARDY, Anibal Osvaldo
HERNÁNDEZ, Antonio María
HERRERA, Bernardo Eligio
HERRERA ARIAS, Manuel H.

HUMADA, Raúl
IBARBIA, José María
IBARRACHE, Julio César
ITURBE, César E. del Valle
JAUNARENA, José Horacio
JUNCOSA, Aldo Rodolfo
KAHLER, Ernesto Rolando
KAMMERATH, Germán Luis
KELLY, Elsa Diana Rosa
KESSLER, Ana Raquel
KOTH, Carlos
LAFALLA, Arturo Pedro
LAMBERTO, Oscar Santiago
LARRABURU, Dámaso
LECONTE Ricardo Guillermo
LEGUIZAMÓN, María Laura
LÓPEZ, Alcides Humberto
LÓPEZ, José Augusto
LÓPEZ ARIAS, Marcelo
LOSADA, Luis Enrique
LYNCH, Carlos Alberto
LLOPIS, Enrique Raúl
MACEDO, Horacio Antonio
MACHADO, Oscar Alfredo
MAIBANA, Elsa I.
MAQUEDA, Juan Carlos
MARTINEZ, Manuel
MARTINEZ, Silvia Virginia
MARTINEZ GARBINO, Emilio Raúl
MATHOV, Enrique José
MATZKIN, Jorge Rubén
MENDOZA, Claudio Ramiro
MENDOZA, Martín
MENEGRINI, Javier R.
MERCADO LUNA, Ricardo Gastón
MICHELLI, Marco Aurelio
MICHITTE, Salomón Antonio
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MIRALLES de ROMERO, Norma A.
MOLARDO, Elvio Francisco
MOLINAS, Ricardo F.
MONTIEL, Sergio Alberto
MOREAU, Leopoldo Raúl
MORELLO, Emilio Pedro
MÜLLER, Mabel Hilda
MUNIAGURRIA, Marcelo Julio
NATALE, Alberto Adolfo
NEDER, Jorge Humberto
NEGRI, Mario
NIEVA, Alejandro Mario
NINO, Jorge

NOVAU, Pedro José
 OLIVERA, Enrique José
 PARADA, Alberto
 PARAJÓN, José María
 PAROLA, José María
 PASQUAL, Rafael Manuel
 PELÁEZ, Víctor
 PEPE, Lorenzo Antonio
 PÉREZ, Jorge Telmo
 PERNASETTI, Horacio F.
 PERRINI, Giocanda E.
 PESCE, Félix
 PICCININI, Ana Ida
 PICHETTO, Miguel Ángel
 PIERRI, Alberto Reinaldo
 PINTO, Guillermo
 POLINO, Héctor
 POLO, Luis Nicolás
 PRAT, Alfredo Ernesto
 RE, Ricardo Horacio
 RICO, Aldo
 RODRÍGUEZ, Jesús
 RODRÍGUEZ, José
 RODRÍGUEZ, Mabel Elsa
 RODRÍGUEZ SANUDO, Hugo B.
 ROIG, Ángel
 ROJO, Rubén Darío
 ROMERO, Humberto Antonio
 ROY, Irma
 SAADI, Ramón Eduardo
 SALINO, María Antonia
 SAMPIETRO, Darcí
 SÁNCHEZ GALDEANO, Roque
 SCELZI, Carlos José
 SEBASTIANI, Claudio A.
 SMITH, Santos
 SOBRINO, Margarita María
 SOBRI, Carlos Ernesto
 SPINOSA, Augusto Juan
 STORANI, Federico Teobaldo M.

SUCARIA, Neyer
 SUEIRO, Carlos Adolfo
 TENEV, Carlos
 TEODOSIU, Jorge Nicolás
 TERRAGNO, Rodolfo Héctor
 TOGNI de VELA, Adriana L.
 TOMA, Miguel Ángel
 TOPA, Raúl Roque
 TRETTEL MEYER, Raúl A.
 USANDIZAGA, Horacio D.
 VARELA, Néstor Ángel
 VARELA CID, Eduardo
 VÁZQUEZ, Roberto
 VENESIA, Guadalupe Edgardo
 VICCHI, Raúl Horacio
 VIGLIONE, Attilio Oscar
 VITAR, José A.
 ZICARELLI, Orlando

AUSENTES, EN MISION OFICIAL:

BALESTRINI, Alberto Edgardo
 BARBERA, Eliseo
 GOLPE, Néstor Lino
 MARCOS, Ricardo Ernesto
 MUÑOZ, Marcelo Bernardo
 ROMERO, Carlos Alberto
 SANTÍN, Eduardo
 TOTO, Francisco Patricio
 VÁZQUEZ, Silvia Beatriz

AUSENTE CON LICENCIA:

ORGÁZ, Carlos Alfredo
 SCHIARETTI, Juan

AUSENTE CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACION DE LA HONORABLE CÁMARA:

ABUJAGGLE, Carlos Enrique

ALBAMONTE, Alberto Gustavo
 ALCALA, Néstor Ricardo
 ALVAREZ ECHAGÜE, Raúl A.
 DAUD, Jorge Carlos
 FLORES, Rafael Horacio
 MANFREDOTTI, Carlos
 MENEM, Carlos Omar
 NACUL, Miguel Camil
 RUIZ PALACIOS, José David A.
 SOLANAS, Fernando E.
 TROYANO, Silvia Elena
 ZAVALIA, José Luis
 ZUCCARDI, María Cristina

AUSENTES, EN MISION ESPECIAL:

ADAIME, Felipe Teófilo
 ALBERTI, Juan Carlos
 ARGÜELLO, Jorge Martín Arturo
 BONINO, Miguel Ángel
 ESCOBAR, Jorge A.
 FIGUEROA, Pedro Octavio
 GARAY, Nicolás Alfredo
 GUZMÁN, María Cristina
 LAHOZ, José Fernando
 MARCOLLI, Juan Miguel A.
 MARTÍNEZ, Esteban
 MERCADER, Martha Evelina
 MURIEL, Néstor Jorge
 ORQUÍN, Leopoldo Manuel
 ORTIZ MALDONADO, Gastón H.
 PATTERSON, Ricardo Ancell
 PELLIN, Osvaldo F.
 PERALTA, Aníbal Pedro
 RODRIGO, Esteban Joaquín
 ROGGERO, Humberto Jesús
 RUBINI, Mirta Elsa
 SARQUIZ, José Alberto
 VALCARCEL, Juan Manuel

SUMARIO

1. Continúa la consideración de los dictámenes de la Comisión de Educación —especializada— en los proyectos de ley del Poder Ejecutivo (41-P.E.-94) y del señor diputado Álvarez García y otros (3.222-D.-94) sobre creación del Instituto Universitario Nacional del Arte. Se aprueba una moción de orden del señor diputado Matzkin de que el asunto vuelva a comisión. (Pág. 2116.)
2. Moción de orden formulada por el señor diputado Matzkin de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas de los asuntos a los que se refieren los números 4 y 5 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 2118.)
3. Moción formulada por el señor diputado Matzkin de que se traten sobre tablas los asuntos a los que se refieren los números 4 y 5 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 2119.)
4. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General, de Familia, Mujer y Minoridad y de Justicia en los proyectos de ley de los señores diputados Zicarelli (2.238-D.-93), Mendoza (C. R.) (259-D.-94), Roy (526-D.-94) y Fernández Meijido y otros (1.434-D.-94) sobre régimen de adopción. Se sanciona con modificaciones. (Págs. 2119-2120.)

5. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Defensa Nacional —especializada— en los proyectos de ley de los señores diputados Kessler y González (5.468-D.-93 y 2.187-D.-94), Toma y otros (2.215-D.-94) y Berhongaray (2.292-D.-94) sobre servicio militar voluntario. Se pasa a cuarto intermedio. (Pág. 2150.)

6. Apéndice:

- A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 2210.)
- B. Inserción solicitada por el señor diputado Usandizaga. (Pág. 2212.)

—En Buenos Aires, a los catorce días del mes de septiembre de 1994, a la hora 17 y 6.

1

CREACION DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE

(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa la sesión. Prosigue la consideración en general del dictamen de la Comisión de Educación —especializada— en los proyectos de ley del Poder Eje-

MOCION DE ORDEN

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: solicito que la Cámara se aparte de las prescripciones reglamentarias a efectos de considerar sobre tablas dos iniciativas. La primera se refiere a la modificación de la ley 19.134, de adopción, que cuenta con dictámenes de las comisiones de Legislación General, de Familia, Mujer y Minoridad y de Justicia. Al haber despachos de estas tres comisiones, el tema está en condiciones de ser tratado. Además, existe la voluntad política de esta Cámara para hacerlo pues fue votada una preferencia cuyo único requisito era el de contar con el consenso de las comisiones especializadas.

El otro asunto es el contenido en el Orden del Día N° 517, sobre implementación del servicio militar voluntario. Al igual que la iniciativa anterior este proyecto tiene acordada una preferencia que requirió como única condición que se emitiera el dictamen respectivo.

En definitiva, estamos solicitando a la Cámara que se aparte del reglamento para que se aboque al tratamiento de dos proyectos trascendentes, significativos y que la comunidad está esperando.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Vicchi. — Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical prestará su acuerdo al tratamiento sobre tablas de estos dos proyectos.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el pedido de apartamiento del reglamento formulado por el señor diputado por La Pampa.

Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda aprobada la moción.

3

MOCION DE SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: deseo solicitar el tratamiento sobre tablas de los dictámenes contenidos en los Ordenes del Día números 580, sobre adopción, y 517, sobre servicio militar voluntario.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor diputado por La Pampa.

Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda aprobada la moción y en consecuencia se incorpora la consideración de los asuntos al plan de labor de la presente sesión.

4

REGIMEN DE ADOPCION

Sr. Presidente (Pierri). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General, de Familia, Mujer y Minoridad y de Justicia en los proyectos de ley sobre régimen de adopción (expedientes 1.683 y 2.238-D-93, 259, 296, 526 y 1.434-D-94).

(Orden del Día Nº 580)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación General, de Familia, Mujer y Minoridad y de Justicia, han considerado los proyectos de ley de los señores diputados Zicarelli,

Mendoza (C.R.); Roy y Fernández Meljide y otros, todos referidos a la modificación de la ley 19.134 de adopción de menores; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

Artículo 1º: La adopción de menores no emancipados se otorgará por sentencia judicial a instancia del adoptante.

La adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado puede otorgarse, previo consentimiento de éstos cuando:

- 1) Se trate del hijo del cónyuge del adoptante.
- 2) Exista estado de hijo del adoptando desde antes de los catorce años de edad.

Artículo 2º: Nadie puede ser adoptado por más de una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges. Sin embargo, en caso de muerte del adoptante o de ambos cónyuges adoptantes, se podrá otorgar una nueva adopción sobre el mismo menor.

El adoptante debe ser por lo menos dieciocho años mayor que el adoptado salvo cuando el cónyuge superviviente adopta al hijo adoptado del premuerto.

Artículo 3º: Se podrá adoptar a varios menores de uno y otro sexo, simultánea o sucesivamente.

Artículo 4º: La existencia de descendientes del adoptante no impide la adopción, pero en tal caso aquellos podrán ser oídos por el juez o tribunal si lo considerara necesario. Cuando existiere más de un hijo biológico o más de un hijo adoptivo sólo podrá acordarse la adopción estableciéndose en la sentencia que la acuerde que beneficia al menor adoptado y no crea perjuicio al núcleo familiar del adoptante.

Artículo 5º: Podrá ser adoptante toda persona que reúna los requisitos establecidos en esta ley, cualquiera fuere su estado civil, debiendo acreditar de manera fehaciente e indubitable, residencia permanente en el país por un período mínimo de tres años anterior a la petición de la guarda.

No podrán adoptar:

- a) Quienes no hayan cumplido treinta años de edad, salvo los cónyuges que tengan más de tres años de casados;
- b) Los ascendientes a sus descendientes;
- c) Un hermano a sus hermanos o medio hermanos.

Artículo 6º: El adoptante deberá haber tenido al menor bajo su guarda durante un lapso no menor de seis meses ni mayor de un año que será fijado por el juez.

El juicio de adopción sólo podrá iniciarse transcurridos seis meses del comienzo de la guarda. La guarda deberá ser otorgada judicialmente por el juez o tribunal del domicilio del menor. Estas condiciones no se requieren cuando se adopte al hijo o hijos del cónyuge.

Artículo 7º: Son requisitos para otorgar la guarda:

- a) Citar a los padres del menor a fin de que presenten sus consentimiento para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción. El juez determinará, dentro de los sesenta días posteriores al nacimiento, la oportunidad de dicha citación. La citación no será necesaria cuando el menor estuviese en un establecimiento y los padres se hubieren desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral o material resultare evidente y hubiere sido comprobado por la autoridad judicial. Tampoco será necesaria cuando los padres hubieran sido privados de la patria potestad;
- b) Tomar conocimiento personal del adoptando;
- c) Tomar conocimiento de las condiciones personales, edades y aptitudes del o de los adoptantes tendiendo en consideración las necesidades y los intereses del menor y atendiendo la opinión de los equipos técnicos consultados a esos efectos y del ministerio público;
- d) Iguales condiciones a las dispuestas en el inciso anterior se podrán observar respecto de la familia biológica.

El juez deberá observar las reglas de los incisos a), b) y c) bajo pena de nulidad.

Artículo 8º: El tutor sólo podrá iniciar el juicio de guarda y adopción de su pupilo una vez extinguidas las obligaciones emergentes de la tutela.

Artículo 9º: Las personas casadas sólo podrán adoptar si lo hacen conjuntamente, excepto en los siguientes casos:

- a) Cuando medie sentencia de separación personal;
- b) Cuando el cónyuge haya sido declarado insano, en cuyo caso deberá oírse al curador o al ministerio público de menores si el curador fuera el cónyuge adoptante;
- c) Cuando se declare la ausencia con presunción del fallecimiento del otro cónyuge.

Artículo 10: En el juicio de adopción deberán observarse las siguientes reglas:

- a) La acción debe imponerse ante el juez o tribunal del domicilio del adoptante, o el lugar donde se otorgó la guarda;
- b) Son partes el adoptante y el ministerio público de menores;
- c) El juez o tribunal oír personalmente si lo juzga necesario al adoptando y a cualquier persona que estime conveniente en beneficio del menor;

d) El juez o tribunal valorará si la adopción es conveniente para el menor, teniendo en cuenta los medios de vida y cualidades morales y personales del o de los adoptantes;

e) El juez o tribunal podrá ordenar, y el ministerio de menores requerir las medidas de prueba o informaciones que estimen convenientes;

f) Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado y secreto. Solamente podrá ser examinado por las partes, sus letrados, sus apoderados y los peritos intervinientes;

g) El juez o tribunal no podrá entregar o remitir los autos, pudiendo solamente expedir testimonios de sus constancias cuando sean beneficiosas para el menor a juicio del juez o tribunal de la adopción, y sean requeridas por otros magistrados;

h) Deberá constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a hacer conocer al adoptando su realidad biológica.

Artículo 11: La sentencia que acuerde la adopción tendrá efecto retroactivo a la fecha del otorgamiento de la guarda. Cuando se trate del hijo del cónyuge el efecto retroactivo será a partir de la fecha de promulgación de la acción.

CAPÍTULO 2

Adopción plena

Artículo 12: La adopción plena confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen. Sólo podrá ser revocada por sentencia judicial por las causas establecidas en el artículo 307 del Código Civil. El adoptado deja de pertenecer a su familia biológica y se extingue el parentesco con los integrantes de ésta así como todos sus efectos jurídicos, con la sola excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. El adoptado tiene, en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico.

Artículo 13: Podrá ser adoptante por adopción plena toda persona que reúne los requisitos establecidos en las disposiciones de la presente ley y no se encuentre comprendida en sus impedimentos.

Cuando la guarda del menor hubiere comenzado durante el matrimonio y el período legal se completare después de la muerte de uno de los cónyuges, podrá otorgarse la adopción al viudo o viuda y el hijo adoptivo lo será del matrimonio.

Artículo 14: Sólo podrá otorgarse la adopción plena de los menores cuando se haya cumplido con los requisitos de los artículos 6º y 7º.

Artículo 15: El hijo adoptivo llevará el primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto si éste solicita su agregación. En caso de que los adoptantes sean cónyuges a pedido de éstos, podrá agregarse al adoptado el apellido compuesto del padre adoptivo o el de la madre adoptiva. En uno y en otro caso podrá

el adoptado después de los dieciocho años solicitar esta adición. Si la adoptante fuese viuda cuyo marido no hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido de aquélla, salvo que existieran causas justificadas para imponerle el de casada.

Artículo 16: Después de acordada la adopción plena no es admisible el reconocimiento del adoptante por sus padres biológicos, ni el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación respecto de aquéllos, con la sola excepción de la que tuviere por objeto la prueba del impedimento matrimonial del artículo 12.

Artículo 17: El adoptado tendrá derecho a conocer su realidad biológica y podrá acceder al expediente de adopción a partir de los dieciséis años de edad.

CAPÍTULO 3

Adopción simple

Artículo 18: La adopción simple confiere al adoptado la posición del hijo biológico; pero no crea vínculo de parentesco entre aquél y la familia biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente determinados en esta ley.

Artículo 19: El juez o tribunal, cuando sea más conveniente para el menor o a pedido de parte por motivos fundados, podrá otorgar la adopción simple.

Artículo 20: Los derechos y deberes que resulten del vínculo de sangre del adoptado no quedan extinguidos por la adopción, con excepción de la patria potestad, inclusive la administración y usufructo de los bienes del menor que se transfieren al adoptante, salvo cuando se adopta al hijo del cónyuge.

Artículo 21: La adopción simple impone al adoptado el apellido del adoptante, pero aquél podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años. La viuda adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su esposo premuerto si existen causas justificadas.

Artículo 22: El adoptante hereda *ab intestato* al adoptado y es heredero forzoso en las mismas condiciones que los padres biológicos; pero ni el adoptante hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia biológica, ni ésta hereda los bienes que el adoptado hubiere recibido a título gratuito de su familia de adopción. En los demás bienes, los adoptantes excluyen a los padres biológicos.

Artículo 23: El adoptado y sus descendientes heredan por representación a los ascendientes del adoptante; pero no son herederos forzosos. Los descendientes del adoptado heredan por representación al adoptante y son herederos forzosos.

Artículo 24: Es revocable la adopción simple:

- a) Por haber incurrido el adoptado o el adoptante en indignidad en los supuestos previstos por el Código Civil para impedir la sucesión;
- b) Por haberse negado alimentos sin causa justificada;
- c) Por petición justificada del adoptado mayor de

d) Por acuerdo de partes manifestado judicialmente, cuando el adoptado fuera mayor de edad.

La revocación extingue, desde su declaración judicial y para lo futuro, todos los efectos de la adopción.

Artículo 25: Después de la adopción simple es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres de sangre y el ejercicio de la acción de filiación. Ninguna de esas situaciones alterará los efectos de la adopción establecidos en el artículo 21.

CAPÍTULO 4

Nullidad e inscripción

Artículo 26: Sin perjuicio de las nulidades que resulten de las disposiciones del Código Civil:

1. Adolecerá de nulidad absoluta la adopción obtenida en violación a lo preceptuado respecto de:

- a) La edad del adoptado;
- b) La diferencia de edad entre adoptante y adoptado;
- c) La adopción que hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto o aparente del menor proveniente de la comisión de un delito del cual hubiere sido víctima el mismo y/o sus padres;
- d) La adopción simultánea por más de una persona si no se tratara de cónyuges;
- e) La adopción de descendientes y de hermanos y medio hermanos.

2. Adolecerá de nulidad relativa la adopción obtenida en violación de los preceptos referentes a:

- a) La edad mínima del adoptante;
- b) Vicios del consentimiento.

Artículo 27: La adopción, su revocación o nulidad deberán inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

CAPÍTULO 5

Efectos de la adopción conferida en el exterior

Artículo 28: La situación jurídica, los derechos y deberes de adoptantes y adoptados entre sí, se regirán por la ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, cuando ésta hubiere sido conferida en el extranjero.

Artículo 29: La adopción concedida en el extranjero de conformidad a la ley de domicilio del adoptado, podrán transformarse en el régimen de la adopción plena establecida en la presente ley.

CAPÍTULO 8

Disposición transitoria

Artículo 30: En los casos en que hubiere guarda extrajudicial anterior a la vigencia de esta ley el juez podrá computar el tiempo transcurrido en guarda conforme al artículo 7º.

Artículo 31: Derógase la ley 19.134 y sus modificaciones.

Artículo 32: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 8 de septiembre de 1994.

José G. Dumón. — Irma Roy. — Francisco de Duraciona y Vedia. — César Arias. — Margarita M. Sobrino. — Leopoldo M. Irquin. — Tomás W. González Cabanías. — Darcy B. Sampietro. — Oscaldo A. Bracchi. — Pedro O. Figueroa. — Carlos R. Alcaraz. — Mercedes Aragonés de Juárez. — Lilian del Carmen Del Fabro. — Pedro J. R. Galante. — Horacio F. Fornasetti. — José M. Anielo. — José S. Arrechca. — Susana B. Ayala. — Liliana Aytz. — María del Pilar Bermúdez. — Miguel A. Bonino. — Oscaldo Borda. — Carlos E. Branda. — Elisa B. Carca. — Jorge C. Daud. — María R. Drisaldi. — Graciela Fernández Meijide. — Francisco U. Fragoso. — Nicolás A. Garay. — Juan O. Gauna. — Ramón F. Giménez. — Gustavo A. Green. — Julio C. Ibanche. — María L. Leguizamán. — Elsa I. Maidana. — Juan C. Maqueda. — Silvia V. Martínez. — Enrique J. Mathov. — Javier R. Meneghini. — Ricardo G. Mercado Luna. — Gastón H. Ortiz Maldonado. — Mabel E. Rodríguez. — María A. Salino. — Raúl A. Trettel Meyer. — Horacio D. Usandizaga.

En disidencia parcial:

Orlando J. Gallo.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación General, de Familia, Mujer y Minoridad y de Justicia, al considerar el proyecto de ley de los señores diputados Zicarelli, Mendoza (C. R.); Roy y Fernández Meijide y otros, todos referidos a la modificación de la ley 19.134 de Adopción de Menores, han considerado conveniente unificarlos en un único dictamen.

El actual régimen de la adopción que data de 1871, además de las modificaciones parciales que legislativamente se incluyeron, han sido consideradas insuficientes, desde diferentes posiciones, para lograr su mejoramiento y convertirse en instrumento eficiente capaz de solucionar, aunque sea en parte, uno de los problemas más acuciantes de nuestros tiempos.

Numerosos han sido los intentos legislativos desde la sanción de la ley 19.134; abundantes fueron las labo-

res de investigación y doctrinarias que se reflejan en los diferentes proyectos que se han considerado por esta comisión.

La vigente legislación había mostrado en su aplicación, a lo largo de estos años, su ineficiencia, que motivó el rechazo de la sociedad, o bien la renuencia a adoptar, por aquellos posibles benefactores de una niñez desvalida. Entre los problemas que suscitaba la ley podemos citar el agravante de las largas esperas para obtener una criatura en guarda con fines de adopción de manera legal; la complejidad de trámites a realizar a los mismos efectos y la inseguridad de la situación hasta el dictado de sentencia que otorga la adopción.

Es por eso que los valores que se tuvieron en cuenta en el presente proyecto de la nueva ley de adopción en reemplazo de la actual 19.134, son: la celeridad, la economía de trámite y su seguridad.

Otorgando seguridad jurídica a las adopciones que se concedan a partir de la vigencia de esta ley, no sólo se ayudará a combatir el tráfico de niños entre otros efectos, sino que se asegura que la adopción favorecerá a los menores integrándolos en un núcleo familiar del cual carecen.

Por otra parte el proyecto tiende a materializar la vocación familiar de los cónyuges ampliando los beneficios de la familia como institución fundamental de nuestra sociedad.

El proyecto en general, a través de su normativa, da seguridad y certeza en la relación preadoptiva, destacándose la fuerte protección del Ministerio Público de Menores y la intervención tuitiva del juez, todo ello en beneficio del bien jurídico protegido: el menor.

La normativa proyectada tiende a facilitar su interpretación judicial a los efectos de una más rápida y segura sentencia de adopción.

En cuanto a lo particular del articulado del proyecto que acá se informa, se destaca del dictamen que la adopción se otorgará únicamente por sentencia judicial a instancia del adoptante. Se mantiene la diferencia de dieciocho años entre el adoptante y el adoptado. Se ha disminuido también, entre los requisitos para adoptar, la edad mínima del adoptante a treinta años disminuyendo a tres años la condición de casados de los adoptantes que no alcancen esa mayoría de edad.

El artículo 6º innova en el sentido que la guarda sólo se otorgará con intervención judicial la que es particularizada en el artículo 7º que impone serios recaudos que deberán ser cumplidos por el juez.

El juicio de adopción es extensamente tratado en el artículo 10, expresando un resguardo de importancia en el inciso f) porque deberá constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a hacer conocer al adoptado su realidad biológica.

El capítulo 2 trata en sus diversos artículos con claridad de normas la constitución y efectos de la adopción plena, sin perjuicio del debido tratamiento en el capítulo 3 del instituto de la adopción simple que se mantiene.

Un capítulo importante es el número 4 que trata de las nulidades absolutas o relativas que puede presentar un trámite de adopción; se provee la pertinente inscripción de la sentencia de adopción.

Se han tenido en cuenta las adopciones conferidas en el extranjero tratando de evitar situaciones que lleven a nulidades no queridas cuando está en juego el interés superior del menor adoptado.

El presente proyecto deroga íntegramente la ley 19.134 y sus modificaciones, sin perjuicio de haber receptado algunas de sus normas que habían sido convalidadas por la doctrina y la jurisprudencia.

Sin más detalles que los expuestos, es que se solicita la sanción del presente proyecto de ley.

José G. Dumón. — Irma Rey.

ANTECEDENTES

1

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º: La adopción de menores no emancipados tendrá lugar por resolución judicial, a instancias del adoptante. También podrá ser adoptado con su consentimiento, el hijo mayor de edad del otro cónyuge.

Artículo 2º: Nadie puede ser adoptado por más de una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges. Sin embargo en caso de muerte del adoptante o de ambos cónyuges adoptantes, se podrá otorgar una nueva adopción sobre el mismo menor.

Artículo 3º: El adoptante debe ser por lo menos dieciséis años mayor que el adoptado. No se exigirá dicha diferencia de edad cuando el cónyuge supérstite adopte al hijo adoptado del premuerto. En caso de adopción conjunta por ambos cónyuges la diferencia de edad será con el cónyuge menor.

Artículo 4º: Se podrá adoptar a varios menores de uno u otro sexo simultánea o sucesivamente.

Artículo 5º: La existencia de descendientes matrimoniales, extramatrimoniales y/o adoptivos, del adoptante, no impide la adopción, pero en tal caso deberán ser oídos por el juez o tribunal cuando éstos fueran mayores de diez años. El juez valorará que se beneficie al menor adoptado y no perjudique al núcleo familiar existente, hecho éste que deberá fundar en su sentencia.

Artículo 6º: No podrán adoptar:

- a) Quien no haya alcanzado la edad de veinticinco años;
- b) El abuelo a su o a sus nietos;
- c) El tutor respecto de su pupilo hasta después de aprobadas judicialmente las obligaciones emergentes de la tutela;
- d) Ninguna persona casada, en forma personal, aun contando con el asentimiento de su otro

Artículo 7º: El adoptante deberá haber tenido al menor bajo su guarda durante un año. Esta condición no se requerirá cuando se adopte al hijo o hijos de su cónyuge. Dicho plazo de guarda podrá reducirse a criterio del juez, hasta un mínimo de seis meses, cuando existan justos motivos o la adopción sea conveniente para el menor.

Artículo 8º: En el juicio de adopción deberán observarse las siguientes reglas:

- a) La acción deberá interponerse ante el juez o tribunal del domicilio del adoptante;
- b) Son partes en el juicio de adopción, el adoptante y/o los adoptantes si éstos fueran cónyuges, el Ministerio de Menores y los padres biológicos del adoptado, siempre que estos últimos no se encuentren incurso en las causales previstas en el artículo siguiente;
- c) El juez o tribunal deberá oír personalmente al menor siempre que éste tuviese una edad mayor a los diez años y/o a cualquier persona que se estime conveniente en beneficio del menor;
- d) El juez o tribunal valorará si la adopción es conveniente para el menor teniendo en cuenta las condiciones morales, personales y medios de vida del o los adoptantes. Dichos requisitos podrán ser acreditados, por cualquier medio de prueba;
- e) Presentado el pedido de adopción, el juez dará traslado del mismo al Ministerio de Menores por un plazo de cinco días y en su caso, a los padres del menor;
- f) Sin más trámite el juez o tribunal ordenará la producción de las pruebas ofrecidas por las partes que en término de treinta días, sin perjuicio de las medidas probatorias que el juez crea conveniente producir en beneficio exclusivo del menor;
- g) La acción podrá interponerse antes de cumplido el plazo previsto en el artículo 7º, ya que para el cálculo del mismo se considerará el tiempo de sustanciación del juicio de adopción hasta el momento en que el juez o tribunal deba dictar sentencia;
- h) Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado y secreto. Solamente podrá ser examinado por las partes, sus letrados, sus apoderados y los peritos intervinientes;
- i) El juez o tribunal no podrá entregar o remitir los autos, pudiendo expedir testimonios de sus constancias cuando sean beneficiosas para el menor a juicio del juez o tribunal de la adopción y sean requeridas por otros magistrados.

Artículo 9º: No podrán ser admitidos como parte en juicio de adopción el padre o la madre del menor en los siguientes casos:

- a) Cuando hubieren sido privados de la patria potestad;

- b) Cuando se hubiese confiado espontáneamente al menor a un establecimiento de beneficencia o de protección de menores público o privado por no poder proveer a su crianza o educación y se hubieran desentendido injustificadamente del mismo en el aspecto afectivo y familiar durante el plazo de un año;
- c) Cuando hubieren manifestado expresamente su voluntad de que el menor sea adoptado ante el órgano estatal competente y/o la autoridad judicial. No siendo válida la manifestación expresada por otros medios;
- d) Cuando el desamparo moral o material del menor resulta evidente, o por haber sido abandonado en la vía pública o sitios similares y tal abandono sea comprobado por la autoridad judicial;
- e) Cuando el menor se hallare en situación de riesgo, tanto físico o moral y ésta fuera constatada por autoridad judicial.

Artículo 10: La sentencia que acuerde la adopción tendrá efecto retroactivo a la fecha de promoción de la acción.

Artículo 11: Los adoptantes no podrán sacar del país a sus hijos adoptados de hasta cinco años de edad sin la previa autorización judicial. Esta deberá ser debidamente fundada y otorgarse con carácter restrictivo, pudiendo exigirse a criterio del magistrado, la constitución de una caución real juratoria, según el caso. El juez competente será aquel que entendió en el juicio de adopción.

CAPÍTULO II

Adopción

Artículo 12: La adopción confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen, la que una vez otorgada, es irrevocable. El adoptado deja de pertenecer a su familia de sangre y se extingue el parentesco con los integrantes de ésta así como todos sus efectos jurídicos, con la sola excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. En igual sentido subsistirán los vínculos jurídicos con la familia paterna o materna según el caso, cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, aunque el cónyuge hubiera fallecido.

Artículo 13: Podrá ser adoptante cualquier persona viuda, divorciada o soltera que reúna los requisitos establecidos en la presente ley y no se encuentre comprendida en sus impedimentos. También podrán serlo los cónyuges que manifiesten unívocamente su voluntad de revestir tal calidad respecto a un mismo menor.

Cuando la guarda del menor hubiere comenzado durante el matrimonio y el período legal se cumpliere después de la muerte de uno de los cónyuges, podrá otorgarse la adopción al supérstite y el hijo adoptivo lo será del matrimonio.

Artículo 14: Sólo podrá otorgarse la adopción con respecto a menores:

- b) Que no tengan filiación acreditada;
- c) Que se encontraren en algunas de las situaciones previstas en el artículo 9°.

CAPÍTULO III

Nullidad e inscripción

Artículo 15: Sin perjuicio de las nulidades que resulten de las disposiciones del Código Civil, adolecerá de nulidad absoluta la adopción obtenida en violación a los siguientes preceptos:

- a) La edad del adoptado;
- b) La diferencia de edad entre el adoptante y adoptado;
- c) Cuando la adopción hubiere tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto o aparente del menor, proveniente de la comisión de un delito del cual hubiese sido víctima el mismo y/o sus padres;
- d) La adopción por más de una persona, excepto que se trate de cónyuges.

Artículo 16: Adolecerá de nulidad relativa la adopción obtenida en violación a los siguientes preceptos:

- a) La edad mínima del adoptante;
- b) Vicios de consentimiento.

Artículo 17: La acción de nulidad, tanto absoluta como relativa, es imprescriptible.

Artículo 18: La adopción, o nulidad deberán inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La comunicación deberá contener los datos personales de los adoptantes, sentencia íntegra que conceda la adopción, carátula del expediente, número de juzgado y secretaría interviniente y el título originario a fin de conocer la filiación para casos de impedimentos matrimoniales. A tal fin el citado registro creará un libro especial que se denominará *De las adopciones*, donde se anotarán los datos precedentemente señalados.

CAPÍTULO IV

Efectos de la adopción conferida en el extranjero. Disposiciones transitorias

Artículo 19: La situación jurídica, los derechos y deberes de adoptantes y adoptados entre sí, se regirán por la ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción cuando ésta hubiere sido concedida en el extranjero.

Artículo 20: La adopción concedida en el extranjero de conformidad a la ley del domicilio del adoptado, podrá transformarse en el régimen de adopción única establecida en la presente ley, acreditándose dicho vínculo y prestando su consentimiento los adoptantes y los adoptados, quienes deberán ser mayores de edad.

Artículo 21: Las adopciones simples otorgadas con anterioridad a la vigencia de la presente quedarán some-

tidas al régimen de la ley 19.134, pero podrán convertirse en adopciones con los efectos y alcances previstos en la ley, a pedido de los adoptantes y con el consentimiento de los adoptados si éstos hubieran alcanzado la mayoría de edad.

También podrán pedirla los adoptados mayores de edad con el consentimiento de los adoptantes. La petición y el consentimiento podrán formularse por disposiciones de última voluntad.

Artículo 22: Los juicios pendientes, deberán registrarse para su validez, en cuanto a sus requisitos, formas, efectos y alcances por lo prescrito en la presente ley.

Artículo 23: Invítase a las provincias a adherir a las normas de procedimiento establecidas en el artículo 8º y a crear el libro especial iniciado en el artículo 16 el que estará a cargo del organismo provincial competente.

Artículo 24: Entre en vigencia esta ley desde su promulgación y queda derogada en consecuencia en particular la ley 19.134 y en general toda otra norma que se oponga a la presente.

Art. 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Orlando A. Zicarelli,

2

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º: La adopción es una institución establecida, fundamentalmente, en interés de los menores.

Artículo 2º: La adopción de menores no emancipados tendrá lugar por resolución judicial a instancias del adoptante.

La adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado podrá otorgarse, previo consentimiento de éstos, cuando:

- a) Se trate de la adopción del hijo del cónyuge del adoptante;
- b) Exista estado de hijo del adoptando desde antes de cumplidos los catorce años, implicando ello que la persona por adoptar hubiere estado integrada, desde su minoridad, al hogar del adoptante.

Artículo 3º: Nadie podrá ser adoptado por más de una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges.

Artículo 4º: No podrá adoptarse a quien ya ha sido adoptado mientras subsista la adopción precedente, excepto que la nueva adopción la efectúe el cónyuge del adoptante.

El impedimento previsto en este artículo desaparece al fallecer el adoptante o ambos cónyuges adoptantes, pudiendo otorgarse en este caso, una nueva adopción sobre el mismo menor.

Artículo 5º: Los cónyuges no pueden adoptar conjuntamente a una misma persona en adopción de diferente

Artículo 6º: Se podrá adoptar, simultánea o sucesivamente, a varios menores de uno y otro sexo, o mayores en los casos contemplados en el artículo 2º. Los hijos adoptivos de un mismo adoptante serán considerados hermanos entre sí a todos los efectos legales.

Artículo 7º: La existencia de descendientes del adoptante no impide la adopción. En tal caso, aquéllos podrán ser oídos por el juez o tribunal si fuesen menores de doce años y deberán ser oídos si fuesen mayores de esa edad. En todos los casos el juez valorará, para acordar la adopción, esencialmente que se beneficie al menor adoptado y no se creen perjuicios al núcleo familiar del adoptante.

CAPÍTULO II

De la capacidad para adoptar

Artículo 8º: Podrán adoptar quienes hayan cumplido la edad mínima de veinticinco años, cualquiera sea su estado civil. Las personas que pretendan adoptar deberán demostrar idoneidad para educar, instruir, proteger y asistir al menor o los menores a dar en adopción.

Artículo 9º: Quien solicite una adopción deberá acreditar, de manera fehaciente e indubitable, residencia permanente en el país por un período mínimo de tres años, anteriores a la petición de la guarda.

Artículo 10º: En todo tipo de adopción, el o los adoptantes deberán ser, por lo menos dieciséis años mayores que el adoptando, salvo cuando el cónyuge superviviente adoptara al hijo del premuerto.

En caso de adopción conjunta, por ambos cónyuges, la diferencia será con el cónyuge menor.

Cuando se trate de la adopción del hijo de uno de los cónyuges por el otro, la diferencia de edad deberá ser de diez años, como mínimo. Excepcionalmente el juez podrá, por motivos justificados, acordar las adopciones aun cuando no exista la diferencia exigida en esta disposición.

Artículo 11º: Cuando adoptaren ambos cónyuges, el requisito de la edad mínima establecido en el artículo 8º, no será tenido en cuenta siempre que contaren con más de tres años de casados o que, aún no habiendo transcurrido ese lapso, se encontrasen en la imposibilidad de procrear.

Artículo 12º: No podrán adoptar:

- a) Quien no haya cumplido la edad de veinticinco años, salvo la adopción por ambos cónyuges, conforme lo dispuesto en el artículo 11;
- b) Quien no guarde una diferencia de dieciséis años respecto del adoptando; salvo cuando se trate de la adopción del hijo del cónyuge o cuando el cónyuge superviviente adopte al hijo del premuerto, según lo dispuesto en el artículo 10;
- c) Un ascendiente a un descendiente;
- d) Un hermano a sus hermanos o medio hermanos;
- e) Las personas mayores de cincuenta y cinco años de edad, salvo que la persona a adoptar hubiere estado integrada, desde su minoridad, al hogar del adoptante o cuando se trate de adoptar al hijo del cónyuge.

Artículo 13: El tutor sólo podrá solicitar la guarda y adopción del pupilo una vez extinguidas las obligaciones emergentes de la tutela.

Artículo 14: Ninguna persona casada podrá adoptar sin el consentimiento de su cónyuge. Dicho consentimiento no será necesario:

- a) Cuando medie sentencia de separación personal declarada por culpa de uno de los cónyuges, para el cónyuge inocente;
- b) Cuando la separación personal sea declarada por culpa de ambos cónyuges o cuando no haya declaración de culpabilidad;
- c) Cuando los cónyuges se encuentren separados de hecho sin voluntad de unirse;
- d) Cuando se adopta al hijo del cónyuge;
- e) Cuando el cónyuge ha sido declarado ausente con presunción de fallecimiento;
- f) Cuando el cónyuge haya sido declarado inepto, en cuyo caso deberá oírse al curador, o al ministerio público si el curador fuera el cónyuge que pretende adoptar.

Artículo 15: No podrá adoptar el cónyuge declarado culpable en la sentencia de separación personal sin el consentimiento del declarado inocente. El consentimiento del cónyuge inocente podrá ser suplido por el juez o tribunal, si la negativa a concederlo fuere infundada.

CAPÍTULO III

Del estado de adoptabilidad

Artículo 16: El juez o tribunal deberá declarar en estado de adoptabilidad a un menor, en los siguientes casos:

- a) Cuando el menor sea huérfano de padre y madre;
- b) Cuando los padres del menor hubieren sido privados de la patria potestad;
- c) Cuando los padres del menor hubieren manifestado expresamente su voluntad de darlo en adopción ante la autoridad judicial competente, no siendo válida la manifestación expresada por otros medios;
- d) Cuando el desamparo moral o material del menor resulte evidente, o por haber sido abandonado en la vía pública o en sitios similares y tal abandono sea comprobado por la autoridad judicial;
- e) Cuando el menor se hallare en situación de riesgo, tanto físico como moral, y éste fuere constatado por la autoridad judicial;
- f) Cuando el menor hubiese sido confiado, en forma espontánea por sus padres o responsables, a un establecimiento de protección de menores, público o privado, o a una institución de beneficencia y, sus padres si se conociera su paradero, se hubieren descuidado en forma indolente sus deberes paterno-filiales o el

aspecto afectivo y familiar, no proveyendo a su crianza y educación, durante un plazo de seis meses. El juez o tribunal podrá extender, si lo considera prudente y las circunstancias del caso lo aconsejan, el plazo previsto por un período que no podrá exceder de otros seis meses.

Artículo 17: El estado de adoptabilidad podrá ser declarado de oficio por el juez o tribunal o en su caso la acción podrá ser promovida por el ministerio público, por la institución que tuviere al menor por cualquier título y/o por la autoridad administrativa a la que corresponda entender en los problemas de la minoridad.

Artículo 18: Previamente a la declaración en estado de adoptabilidad del menor el juez o tribunal deberá citar, en los casos que correspondan, a los padres biológicos a una audiencia, bajo pena de nulidad.

Si los padres del menor no fueran conocidos o se desconociera su domicilio se los citará por edictos. Si éstos no comparecieran, con la previa acreditación de los extremos invocados y la intervención del asesor de menores, el juez o tribunal podrá declarar el estado de adoptabilidad del menor.

Si fueran conocidos, citados a la audiencia podrán consentir o no la declaración en estado de adoptabilidad de su hijo. Si la consintieran se declarará sin más trámite. Si no prestaren su consentimiento, deberán acreditar que el menor no se encuentra en estado de abandono, no siendo suficiente la mera oposición fundada.

La incomparecencia a la audiencia prevista, podrá tenerse como reconocimiento ficto del estado de abandono, a tales efectos el juez o tribunal valorará cada situación en particular.

Artículo 19: El juez o tribunal podrá tomar las medidas de prueba que considere convenientes a los efectos de evaluar las circunstancias del caso, debiendo resolver de inmediato y teniendo en cuenta el mejor interés del menor.

Artículo 20: No podrá ser declarado el estado de adoptabilidad si durante el transcurso del proceso algún miembro de la familia del menor pidiera hacerse cargo del mismo y esta petición fuera favorable al interés de éste según el criterio de la autoridad judicial.

Artículo 21: La declaración del estado de adoptabilidad procederá independientemente de la solicitud de guarda y adopción, pero será un requisito previo a la misma.

CAPÍTULO IV

De la guarda

Artículo 22: Como requisito previo a la adopción el juez o tribunal debe otorgar a el o los futuros adoptantes la guarda del adoptado. Este requisito no será necesario en los casos contemplados en los incisos a) y b) del artículo 19.

Artículo 23: En el juicio de guarda y adopción deberán observarse las siguientes reglas:

- a) La acción debe interponerse ante el juez o tribunal del domicilio del adoptado;

- b) Son partes el o los adoptantes, el adoptado si es mayor de edad o menor emancipado y el ministerio pupilar, si se tratase de menores o incapaces. También podrán ser citados los descendientes del adoptante en los términos del artículo 7º;
- c) El juez o tribunal oír personalmente a la persona que se va a adoptar o tomará conocimiento personal de ella; también podrá oír a cualquier otra persona que estime conveniente en beneficio del menor;
- d) Las audiencias serán privadas y el expediente reservado. Solamente podrá ser examinado por las partes, sus letrados, sus apoderados y peritos intervinientes;
- e) El juez o tribunal valorará si la adopción fuera conveniente para el menor, tomando en cuenta las condiciones morales, medios de vida y cualidades personales del adoptante, pudiendo solicitar todas las medidas de prueba que considere necesarias al efecto de formar fehaciente convicción de ello;
- f) En todos los casos el juez o tribunal tomará todas las precauciones necesarias para proveer a la mayor celeridad de los trámites, en beneficio del menor.

Artículo 24: A efectos de otorgar la guarda de un menor, el juez o tribunal, bajo pena de nulidad, deberá:

- a) Citar a los padres biológicos del menor a fin de que presten su asentimiento para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción, salvo que previamente se haya declarado el estado de adoptabilidad conforme lo dispuesto en el capítulo III.

El asentimiento de la madre no es válido si no han transcurrido cuarenta días desde la fecha del parto y, en todos los casos será preguntada por las circunstancias que determinan su voluntad de prestar dicho asentimiento;

- b) Tomar conocimiento personal del adoptado;
- c) Requerir el asentimiento del cónyuge declarado inocente en la separación personal, según lo dispuesto en el artículo 15.

Artículo 25: El período de guarda será fijado por el juez o tribunal teniendo en consideración las necesidades del menor y la opinión de expertos y profesionales interdisciplinarios, los que serán consultados cuando fuere conveniente para proveer al interés del menor.

El plazo de guarda no podrá ser inferior a cuatro meses ni superior a diez. Si existiese una guarda de hecho, el plazo podrá reducirse a dos meses, previo dictamen del equipo interdisciplinario y del ministerio público.

Artículo 26: Si la guarda del menor hubiera sido otorgada con fines de adopción a ambos cónyuges y el plazo de ésta se completara después de la muerte de uno de ellos, podrá otorgarse la adopción al viudo o viuda y, a todos los efectos, se entenderá que el hijo adoptivo

Artículo 27: El o los guardadores no podrán cambiar el domicilio del menor sin la autorización del juez o tribunal que otorgó la guarda o del que deba efectuar su seguimiento.

Autorizado el cambio de domicilio, el o los guardadores deberán presentarse, en un plazo máximo de quince días, ante el juez o tribunal competente a fin de que tome conocimiento e intervenga en el seguimiento de la guarda y en la posterior adopción.

Artículo 28: El juez o tribunal que otorgó la guarda del menor hará un seguimiento del desarrollo de la misma, tomando conocimiento de las condiciones en las que el menor se desenvuelve, su adaptabilidad al ámbito familiar, especialmente en el aspecto afectivo; evaluará cómo se satisfacen las necesidades del menor y cómo se provee a su crianza y educación. Podrá, en cualquier momento, citar a el o los guardadores y tomar conocimiento personal del menor, así como requerir cualquier otra medida que le permita conocer la evolución y desarrollo de la guarda concedida.

CAPÍTULO V

De la adopción

Artículo 29: La adopción puede ser otorgada con carácter de plena o simple.

Artículo 30: El adoptado tiene derecho a conocer su calidad biológica y podrá tener acceso al expediente de la adopción cumplida su mayoría de edad.

Artículo 31: El juez o tribunal, previo a dictar la resolución judicial que otorgue la adopción, deberá:

- a) Tener una audiencia personal con el grupo familiar adoptante, entendiendo por tal el integrado por el o los adoptantes, así como los ascendientes y los descendientes que convivieran con ellos y con el ministerio pupilar, en caso de tratarse de adopción de menores o incapaces;
- b) Oír personalmente a todo menor a ser adoptado que pueda expresarse y, en cualquier caso, tomar conocimiento personal con él;
- c) Solicitar informes técnico-profesionales a médicos, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, asistentes sociales y a todos aquellos profesionales que le permitan obtener un informe interdisciplinario a efectos de poder evaluar cada situación en particular;
- d) Valorar la conveniencia de la adopción para el adoptado, teniendo en cuenta los antecedentes familiares, condiciones y cualidades personales y ambientales del menor y de el o los futuros adoptantes, así como también cualquier otra circunstancia que considere de importancia;
- e) El juez o tribunal no podrá entregar o recibir los autos, pudiendo expedir testimonios de sus conclusiones cuando sean requeridos por otros magistrados y recibir beneficios para el menor, a su juicio;

- f) Hacer conocer a el o los adoptantes, en la instancia que considere oportuna, la conveniencia de que el menor conozca su realidad biológica.

Artículo 32: La petición de adopción podrá ser solicitada antes de cumplido el plazo de guarda, pero la sentencia sólo puede dictarse al término de dicho período.

Artículo 33: La sentencia que acuerde la adopción tendrá efectos retroactivos a la fecha de solicitud de la guarda.

De la adopción simple

Artículo 34: La adopción simple confiere al adoptado el estado de hijo del adoptante, estableciendo un parentesco restringido sólo a las relaciones entre adoptantes y adoptado, y entre éste y los hijos consanguíneos y los adoptivos que pudieran tener el o los adoptantes, los que serán considerados hermanos a todos los efectos legales.

Artículo 35: Los derechos y deberes que resultan del parentesco consanguíneo del adoptado no quedan extinguidos por la adopción simple, con excepción de la patria potestad, la que se transfiere al adoptante.

Cuando se trata de la adopción del hijo del cónyuge, la patria potestad será ejercida por ambos, conforme lo dispuesto en el Código Civil sobre la materia.

Artículo 36: Después de acordada la adopción simple, es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos y el ejercicio de la acción de filiación, pero ninguna de estas situaciones alterará los efectos de la adopción conferida, salvo en el caso previsto en el inciso c) del artículo 38.

Artículo 37: Será facultad privativa del juez o tribunal, cuando lo considere más conveniente para el menor y concurran circunstancias que a su criterio sean de carácter excepcional, otorgar la adopción de carácter simple.

Artículo 38: La adopción simple es revocable:

- Por haber incurrido el adoptante o adoptado en alguna de las causales de indignidad o deshonoración previstas en el Código Civil;
- Por haber negado, el adoptante o el adoptado, alimentos sin causa justificada;
- Por el adoptado, cuando sus padres biológicos lo hubieran reconocido y hubiese quedado emplazado en el estado del hijo por sentencia judicial en juicio de reclamación de estado;
- Por acuerdo de partes, cuando el adoptado fuera mayor de edad, manifestado judicialmente.

Artículo 39: Desde la resolución judicial de revocación y para el futuro se extinguen todos los efectos de la adopción.

De la adopción plena

Artículo 40: La adopción plena confiere al adoptado una nueva filiación que sustituye la de origen. El adoptado deja de pertenecer a su familia biológica,

extinguiéndose su parentesco con los integrantes de ésta, así como todos los efectos jurídicos que lo relacionaban con ella, a excepción de los impedimentos matrimoniales que subsisten.

El adoptado ingresa a la familia del adoptante con los mismos derechos y obligaciones que los hijos consanguíneos.

Si el adoptado fuera menor de edad no emancipado, la patria potestad se transfiere al adoptante, así como también el usufructo y administración de los bienes del menor.

Artículo 41: El nombre y apellido del adoptado, tanto en la adopción plena como en la adopción simple, se regirán por las normas relativas al nombre de las personas.

Artículo 42: El adoptado tiene derecho a conocer su realidad biológica y podrá exigir tomar conocimiento de las actuaciones judiciales cumplida la mayoría de edad.

Artículo 43: Se podrá otorgar la adopción plena en los siguientes casos:

- Huérfanos de padre y madre;
- Quienes no tengan filiación acreditada;
- Quienes hayan sido declarados en estado de adoptabilidad, conforme lo dispuesto en el artículo 16 y subsiguientes.

Artículo 44: La adopción plena es irrevocable. Después de acordada la adopción no es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio, por el adoptado, de la acción de filiación respecto de aquéllos, con la sola excepción de la que tuviere por objeto la prueba del impedimento matrimonial.

CAPÍTULO VI

De la nulidad e inscripción

Artículo 45: Sin perjuicio de las nulidades que resulten de las disposiciones del Código Civil, es de nulidad absoluta la adopción otorgada en violación a los preceptos referidos a:

- La edad del adoptado;
- La adopción por más de una persona, excepto cuando se tratare de cónyuges;
- La adopción de un ascendiente a un descendiente y de hermanos y medio hermanos entre sí;
- La diferencia de edad entre adoptante y adoptado;
- Cuando la adopción hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto o aparente del menor proveniente de la comisión de un delito del cual hubiere sido víctima el mismo y/o sus padres.

Artículo 46: Adolecerá de nulidad relativa la adopción otorgada en violación a los preceptos de:

- a) Edad mínima del adoptante;
- b) Vicios del consentimiento.

Artículo 47: Las nulidades relativas serán declaradas por el juez o tribunal teniendo en consideración el interés protegido de quien interpone la acción. En caso de conflicto entre el interés de quien interpone la acción y del adoptado, deberá estarse al interés de este último, debiendo convalidarse la adopción.

Artículo 48: La adopción, su revocación o nulidad deberán inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

CAPÍTULO VII

De la ley aplicable y de la jurisdicción en la adopción. Efectos de la adopción conferida en el extranjero

Artículo 49: La capacidad, el consentimiento y demás requisitos para ser adoptado, el procedimiento de adopción, las formas de constitución del vínculo y sus efectos; la capacidad para adoptar y los demás requisitos para ser adoptante y los derechos y deberes de adoptados y adoptantes entre sí, se regirán por la ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción.

Artículo 50: Los requisitos de publicidad y de registro de la adopción quedarán sometidos a la ley del Estado donde se exige su cumplimiento.

Artículo 51: Será competente para decidir la nulidad o revocación de la adopción el juez o tribunal del Estado del domicilio del adoptado al momento del otorgamiento, o el del actual del adoptante y adoptado, a opción del actor.

Artículo 52: La adopción conferida en el extranjero de conformidad a la ley del Estado del domicilio del adoptado puede convertirse de acuerdo al régimen de adopción regulado en esta ley, acreditándose dicho vínculo y prestando su asentamiento el adoptante y el adoptado, quien deberá ser mayor de edad.

CAPÍTULO VIII

Artículo 53: Sustitúyese el texto de los artículos 491 y 492 del Código Civil por los siguientes:

Artículo 491: El ministerio pupilar debe pedir el nombramiento de tutores o curadores de los menores o incapaces que no lo tengan. Antes de ser éstos nombrados puede pedir también, si fuese necesario, que se aseguren los bienes y se dé a los menores o incapaces un lugar donde se provea a su cuidado.

El ministerio pupilar podrá promover la acción de declaración de adoptabilidad en los casos previstos en el artículo 16 de la Ley de Adopción.

Artículo 492: El nombramiento de los tutores o curadores, el discernimiento de la tutela o curatela y el otorgamiento de la guarda con fines de adop-

ción, deben efectuarse con conocimiento del ministerio pupilar, quien puede deducir oposición cuando no sean convenientes los tutores, curadores, guardadores o futuros adoptantes, al interés de la persona o bienes de los menores o incapaces.

Asimismo el ministerio pupilar será parte en el juicio de adopción.

Artículo 54: Incorporáse como artículo 3.566 bis del Código Civil, el siguiente:

Artículo 3.566 bis: El adoptado por adopción simple hereda al adoptante y es heredero forzoso. Los descendientes del adoptado heredan por representación al adoptante y son herederos forzosos.

Art. 54: Sustitúyese el texto del artículo 3.560 bis del Código Civil, por el siguiente:

Artículo 3.569 bis: En caso de adopción simple el adoptante hereda al adoptado y es heredero forzoso de éste. El adoptante no hereda de los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia biológica o adoptiva anterior, salvo que no hubiese herederos.

La familia de origen no hereda sobre los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia adoptiva, salvo que no hubiere herederos. En los demás bienes el adoptante excluye a los padres biológicos salvo que el adoptado sea el hijo del cónyuge del adoptante, en cuyo caso ambos concurren en partes iguales.

Artículo 56: Sustitúyese el texto de los artículos 12 y 14 de la Ley 18.248, por los siguientes:

Artículo 12: En el caso de adopción plena, el hijo adoptivo llevará el apellido del adoptante. Cuando los adoptantes fueran cónyuges regirá lo dispuesto en el artículo 42. En el caso de adopción simple, el hijo adoptivo llevará el apellido del adoptante, pero desde los dieciocho años de edad podrá adicionarse el de origen.

Cuando la adoptante fuera viuda, el adoptado llevará su apellido de soltera salvo causas justificadas que hagan necesario imponerle el de casada. La viuda adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su esposo predecesor.

Artículo 14: Si la adopción fuera revocada o anulada, el adoptado perderá el apellido de adopción. Sin embargo, si fuera públicamente conocido por ese apellido, podrá ser autorizado por el juez o tribunal a conservarlo, salvo que la causa de revocación fuera imputable al adoptado.

Artículo 57: Derógase la ley 19.134.

Artículo 58: Derógase el artículo 13 de la ley 18.248.

Artículo 59: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Claudio R. Mendoza. — Hugo A. Crámaro.

3

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º: Modifícase los artículos 6º, 11 inciso c) de la ley 19.134, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Artículo 6º: El adoptante deberá haber tenido al menor bajo su guarda durante el término de un año. La guarda será otorgada judicialmente previa citación a los padres de sangre cuando hubieren reconocido al menor. Estas condiciones no se requieren cuando se adopte al hijo o hijos del cónyuge.

Artículo 11, inciso c): Cuando hubieren manifestado expresamente su voluntad de que el menor sea adoptado ante autoridad judicial.

Artículo 2º: Incorpórase al artículo 30, apartado I de la ley 19.134 como inciso c) el siguiente texto:

Inciso c): El abandono supuesto o aparente del menor proveniente de la comisión de un delito del cual hubiere sido víctima el menor o sus padres.

Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Irma Roy

4

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º: La adopción de menores no emancipados deberá tener lugar por resolución judicial, a instancia del adoptante. También podrá otorgarse la adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado previo consentimiento de éstos prestado ante el juez o tribunal cuando:

1. Se trate del hijo del cónyuge del adoptante.
2. Existiere posesión de estado de hijo del adoptante desde antes de los catorce años de edad.

Artículo 2º: Nadie puede ser adoptado por más de una persona simultáneamente salvo que los adoptantes sean cónyuges. El adoptante debe ser, por lo menos, dieciséis años mayor, respecto a la edad del que vaya a ser adoptado, salvo cuando el cónyuge superviviente adopta al hijo del premuerto.

Artículo 3º: Se podrá adoptar a varios menores de uno y otro sexo, simultánea o sucesivamente.

Artículo 4º: La existencia de descendientes del adoptante no impide la adopción; en tal caso, éstos deberán ser oídos por el juez o tribunal, cuando tuvieren capacidad para expresarse.

Artículo 5º: Podrá ser adoptante toda persona que reúna los requisitos establecidos en este código, cualquiera fuere su estado civil. Debiendo acreditar de manera fehaciente o indubitante, residencia permanente en el país por un período mínimo de tres años anterior a la petición de la guarda.

No podrán adoptar:

- a) Quien no haya cumplido veinticinco años de edad;
- b) Un ascendiente a un descendiente;
- c) Un hermano a sus hermanos o medio hermanos.

Artículo 6º: El tutor sólo podrá iniciar la acción de guarda para adoptar al pupilo una vez extinguidas las obligaciones de la tutela.

Artículo 7º: Ninguna persona casada podrá adoptar sin el consentimiento de su cónyuge.

Dicho consentimiento no será necesario:

- a) Cuando los cónyuges se encontraran separados de hecho sin voluntad de unirse por un tiempo continuo mayor de dos años;
- b) Cuando un cónyuge hubiere sido declarado ausente con presunción de fallecimiento;
- c) Cuando un cónyuge hubiere sido declarado insano, en cuyo caso deberá oírse al curador o al ministerio público si el curador fuera el cónyuge adoptante.

Artículo 8º: Cuando el cónyuge adoptante hubiere sido declarado culpable en la sentencia de separación personal, será necesario el consentimiento del declarado inocente para otorgar la adopción. Dicho consentimiento podrá ser otorgado por el juez o tribunal si la negativa a darlo fuera infundada.

CAPÍTULO II

De la declaración en estado de adoptabilidad

Artículo 9º: Previo a la guarda y adopción el juez o tribunal deberá declarar al menor en estado de adoptabilidad. Estos requisitos no serán necesarios en los casos contemplados en los incisos 1 y 2 del artículo 1º.

Artículo 10: El juez o tribunal deberá declarar en estado de adoptabilidad a un menor en los siguientes casos:

- a) Cuando el menor sea huérfano de padre y madre;
- b) Cuando los padres del menor hubieran sido privados de la patria potestad;
- c) Cuando los padres del menor hubieran manifestado expresamente su voluntad de darlo en adopción ante la autoridad judicial competente, no siendo válida la manifestación expresada por otros medios;
- d) Cuando el desamparo moral o material del menor resulte evidente, o por haber sido abandonado en la vía pública o en sitios similares y tal abandono sea comprobado por la autoridad judicial;

c) Cuando el menor hubiere sido confiado espontáneamente a un establecimiento de protección de menores público o privado y sus padres se hubieren desentendido injustificadamente de sus deberes paternos durante un plazo de un año.

Artículo 11: El estado de adoptabilidad sólo podrá ser declarado judicialmente. El juez o tribunal procederá de oficio o a instancia del ministerio pupilar.

Artículo 12: En el juicio de adoptabilidad se observarán las siguientes reglas:

1. Será competente el juez o tribunal especializado, correspondiente al domicilio del menor.
2. Serán consideradas partes el ministerio público y los padres biológicos del menor.
3. El juez deberá tomar conocimiento de vista del menor en todos los casos, y oír si éste tuviera capacidad para expresarse.
4. La declaración en estado de adoptabilidad seguirá las normas que regulan el proceso sumario en los respectivos ordenamientos procesales. Fijándose en treinta días el plazo en el cual deberán producirse las pruebas ofrecidas, sin perjuicio de las que el juez o tribunal ordene de oficio por considerárlas convenientes en beneficio del interés del menor, sin exceder del término fijado. El plazo para dictar sentencia será de diez días.
5. No podrá ser declarado el estado de adoptabilidad si durante el transcurso del proceso algún miembro de la familia del menor pudiera hacerse cargo del mismo. Deberá otorgársele carácter de parte a efectos de acreditar que dicha petición resulta favorable al interés del niño. Acreditada la conveniencia de la petición, cesará el trámite de declaración en estado de adoptabilidad. De no prosperar la petición del pariente, se reanudará el trámite.
6. La resolución que declare al menor en estado de adoptabilidad es recurrible.

Artículo 13: La madre del menor sólo podrá prestar consentimiento para el otorgamiento de la guarda de su hijo una vez transcurridos cuarenta días de la fecha del parto.

Durante dicho período el juez interviniente dispondrá provisoriamente del menor.

De la guarda

Artículo 14: Declarado el estado de adoptabilidad y firme y consentida la sentencia, el juez o tribunal procederá a otorgar la guarda del menor. Dicha guarda se discernirá a favor de las personas inscritas en los respectivos registros de aspirantes a adopción que se lleven en la jurisdicción del órgano judicial actuante, según el orden de mérito y prelación que corresponda.

Artículo 15: El período de guarda será fijado por el juez o tribunal teniendo en cuenta la opinión de los equipos técnicos y evolución del adoptado, no debiendo

Artículo 16: Cuando la guarda del menor hubiera comenzado durante el matrimonio y el período legal es complementaria después de la muerte de uno de los cónyuges, podrá otorgarse la adopción al viudo/a y el hijo adoptivo le será del matrimonio.

Del juicio de adopción

Artículo 17: En el juicio de adopción deberá observarse las siguientes reglas:

1. La acción deberá interponerse ante el juez o tribunal del domicilio del menor.
2. Son parte el o los adoptantes, el adoptado cuando sea mayor de edad o estuviera emancipado y el ministerio de menores, tratándose de menores incapaces.
3. El juez o tribunal deberá oír personalmente a todo menor en trámite de adopción con capacidad para expresarse.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el juez deberá tener una audiencia con el grupo familiar.
5. El juez o tribunal valorará si la adopción es conveniente para el adoptado teniendo en cuenta sus antecedentes familiares, cualidades personales y circunstancias ambientales de aquél y del o de los adoptantes, así como cualquier otro dato que considere relevante.
6. Las audiencias serán privadas y el expediente reservado.
7. Deberá constar en la sentencia que el adoptante ha hecho conocer al adoptado su realidad biológica, y que éste tendrá acceso al expediente cuando llegue a la mayoría de edad.
8. La sentencia que acuerde la adopción tendrá efecto retroactivo a la fecha de otorgamiento de la guarda.

Artículo 18: La adopción puede otorgarse con carácter de plena o simple. Las partes pueden solicitarla en una u otra forma.

CAPÍTULO III

De la adopción simple

Artículo 19: La adopción simple confiere al adoptado la posesión del hijo, pero no crea vínculo de parentesco entre aquél y la familia biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente determinados en este Código.

Los hijos adoptivos de un mismo adoptante serán considerados hermanos entre sí.

Artículo 20: Los derechos y deberes que resulten del vínculo biológico del adoptado no quedan extinguidos por la adopción. Se transfieren al adoptante la patria potestad, la administración y usufructo de los bienes del menor, salvo cuando se adopta a los hijos del cónyuge.

Artículo 21: La adopción simple es revocable.

- a) Por haber incurrido el adoptante o adoptado en causas de indignidad o desheredación, en los supuestos previstos en el Código Civil;
- b) Por haberse negado al adoptante o adoptado alimentos sin causa justificada;
- c) Por acuerdo de partes manifestado judicialmente cuando el adoptado fuere mayor de edad;
- d) Por el adoptado cuando sus padres biológicos lo hubieren reconocido o hubiere quedado emplazado en el estado de hijo por sentencia judicial en juicio de reclamación de estado.

Artículo 22: La revocación extingue todos los efectos de la adopción desde su declaración judicial y para el futuro.

Artículo 23: Después de acordada la adopción simple, es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos y el ejercicio de la acción de filiación, pero ninguna de estas situaciones alterará los efectos de la adopción establecidos en el artículo 19.

Artículo 24: Los adoptantes no podrán sacar del país a sus hijos adoptados de hasta cinco años de edad sin la previa autorización judicial. Esta deberá ser debidamente fundada y otorgarse con carácter restrictivo, pudiendo exigirse a criterio del magistrado la constitución de una caución real juratoria, según el caso. El juez competente será aquel que entendió en el juicio de adopción.

CAPÍTULO IV*De la adopción plena*

Artículo 25: La adopción plena confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen. El adoptado deja de pertenecer a su familia biológica y se extingue el parentesco con los integrantes de ésta, así como todos sus efectos jurídicos, subsistiendo los impedimentos matrimoniales.

La filiación por adopción otorga los mismos derechos y obligaciones que la filiación por naturaleza.

Artículo 26: Podrá solamente otorgarse la adopción plena con respecto a:

1. Huérfanos de padre y madre.
2. Quiénes no tengan filiación acreditada.
3. Quiénes hayan sido declarados en estado de adoptabilidad, conforme lo dispuesto en el artículo 10 y subsiguientes.

Artículo 27: La adopción plena es irrevocable.

Después de acordada la adopción plena no es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio, por el adoptado, de la acción de filiación respecto de aquéllos, con la sola excepción de la que tuviere por objeto la prueba del impedimento matrimonial.

CAPÍTULO V*De la nulidad de la adopción*

Artículo 28: Sin perjuicio de las nulidades que resulten de las disposiciones de este Código, es de nulidad absoluta la adopción otorgada en violación a los preceptos referentes:

1. Edad del adoptado.
2. Diferencia de edad entre adoptante y adoptado.
3. Adopción por más de una persona, si no se trata de cónyuges.
4. Cuando la adopción hubiere tenido un hecho ilícito como antecedente necesario.
5. Adopción de un ascendiente a un descendiente y de hermanos y medio hermanos entre sí.

Artículo 29: Adelecerá de nulidad relativa la adopción otorgada en violación a los preceptos de:

1. Edad mínima del adoptante.
2. Vicios del consentimiento.

Artículo 30: Las nulidades relativas serán declaradas por el juez o tribunal teniendo en consideración el interés protegido de quien interpone la acción, en caso de conflicto entre el interés de quien interpone la acción y del adoptado, deberá estarse al interés de este último, debiendo convalidarse la adopción.

Artículo 31: La adopción, su revocación o nulidad deberán inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

CAPÍTULO VI*De la ley aplicable y de la jurisdicción
Efectos de la adopción conferida en el extranjero*

Artículo 32: La capacidad, el consentimiento y demás requisitos para ser adoptado, el procedimiento de adopción, las formas de constitución del vínculo y sus efectos, la capacidad para adoptar, los deberes y derechos de adoptado y adoptantes entre sí y los demás requisitos para ser adoptante, se regirán por la ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción.

Artículo 33: Los requisitos para la publicidad y el registro de la adopción quedarán sometidos a la ley del Estado donde se exige su cumplimiento.

Artículo 34: Serán competentes para declarar la nulidad o revocación de la adopción el juez o tribunal del estado del domicilio del adoptado al momento del otorgamiento de la adopción.

Artículo 35: La adopción conferida en el extranjero de conformidad a la ley del domicilio del adoptado podrá transformarse en el régimen de adopción regulado por este Código acreditándose dicho vínculo y prestando su consentimiento los adoptantes y los adoptados, quienes deberán ser mayores de edad.

CAPÍTULO VII

Artículo 36: Incorpórase como artículos 3.565 bis y 3.569 bis los siguientes:

Artículo 3.565 bis: El adoptado por adopción simple hereda al adoptante y es heredero forzoso. Los descendientes del adoptado heredan por representación al adoptante y son herederos forzosos.

Artículo 3.569 bis: El adoptante hereda al adoptado y es heredero forzoso de éste, pero el adoptante no hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia adoptiva.

En los demás bienes los adoptantes excluyen a los padres biológicos.

Artículo 37: Sustitúyese el texto de los artículos 12 y 14 de la ley 18.248, por los siguientes:

Artículo 12. En caso de adopción plena, el hijo adoptivo llevará el apellido del adoptante. Cuando los adoptantes fueran cónyuges regirá lo dispuesto en el artículo 49. En el caso de adopción simple, el hijo adoptivo llevará el apellido del adoptante, pero desde los dieciocho años de edad podrá adicionarse el de origen.

Cuando la adoptante fuera viuda, el adoptado podrá llevar únicamente su apellido de soltera salvo causas justificadas que hagan necesario imponerle el de casada.

Artículo 14: Si la adopción fuese revocada o anulada, el adoptado perderá el apellido de adopción. Sin embargo, si fuese públicamente conocido por ese apellido podrá ser autorizado por el juez o tribunal a conservarlo, salvo que la causa de la revocación fuera imputable al adoptado.

Artículo 38: Derógase la ley 19.134.

Artículo 39: Derógase el artículo 13 de la ley 18.248.

Artículo 40: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Graciela Fernández Meijide. — Carlos A. Alvarez. — Alfredo P. Bravo. — Elsa D. R. Kelly. — Enrique R. Llopis. — Ricardo F. Molinas. — Osvaldo F. Pellin. — Ana I. Piccinini. — Fernando E. Solanas. — María C. Zuccardi.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Dumón. — Señor presidente: después de un largo recorrido llegamos al final de un camino, con este dictamen referido a la futura ley de adopción, que pretende recoger las inquietudes del sector de la comunidad jurídica y también de las diversas expresiones políticas que encuentran su ámbito en esta Cámara.

Este largo camino se ha visto jalado de formas estuercas, constancia y dedicación, en

muchos casos de legisladores que ya han finalizado sus mandatos y que nos dejaron sus trabajos como testimonios.

Hace poco observaba los Diarios de Sesiones del debate que en este recinto se dio en 1948, en el que hubo una circunstancia similar a la actual: la comisión de aquel momento incluyó en su dictamen varias cuestiones que habían producido comisiones anteriores. En este caso especial, se trata de algo que no podemos dejar de señalar, aunque seríamos injustos si diéramos nombres propios; de la misma forma hay que destacar a los asesores de las comisiones de Legislación General y de Familia, Mujer y Minoridad que trabajaron con una sola bandera: el interés de los menores.

En cuanto a los legisladores, tengo que hacer justicia. En 1990, fui miembro de la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad y conocí a una diputada que me conmovió por su sensibilidad y preocupación sobre este tema. Al reintegrarse a la Cámara la encontré en la misma situación, tratando de concretar el despacho. Por eso me parece que es imprescindible formular un reconocimiento a la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad, la señora diputada Inna Roy. (*Aplausos.*)

Oportunamente, se constituyó un grupo de trabajo cuya coordinación se encomendó a la señora diputada María Laura Leguizamón, quien finalmente —más allá de los inconvenientes que son propios de tal actividad— presentó como conclusión un trabajo cuyo texto coincide exactamente casi con el del dictamen que estamos considerando.

La adopción es una de las instituciones más viejas del derecho, y tiene una mezcla de caracteres privados y públicos. En rigor, ha variado a lo largo de los años; comenzó con la vieja institución del derecho romano —la *adoptio* y *adrogatio*— que amparaba todo el interés de los adoptantes para que ellos tuvieran una continuidad religiosa y una continuidad en la herencia. No valía de nada la voluntad del adoptado, ya que se trataba de una *alieni iuris*.

El concepto de adopción, que atravesó por una etapa contractualista en el derecho español y en el inglés, tuvo un cambio fundamental en la legislación francesa en 1939, recogiendo lo que en aquel momento se dio en llamar la legitimación adoptiva.

Se produjeron cambios que influyeron en nuestro derecho, porque cuando se dictó el Código Civil argentino Vélez Sarsfield no admitía la figura de la adopción. Incluso, en una

nota dirigida al ministro de Justicia manifestaba que no tenía sentido crear una ilusión en cuanto al tema vinculado con la herencia, ya que los hombres que no tenían descendencia podían disponer libremente de sus bienes. Por ello, no incluyó ninguna norma vinculada con la adopción en el Código Civil.

Sin embargo, la voluntad y el amor de aquellos que no podían tener hijos naturalmente, y el desamparo por el que debían atravesar muchos menores, conmovieron a la comunidad y a los gobernantes. Fue así como en 1918 se dictó la ley 13.252. Pero es necesario releer los discursos de los diputados y senadores de las más diversas facciones políticas para ver que tenían un interés muy diferente al vinculado con la protección de los menores y a la posibilidad de darles una cobertura solidaria.

Pero lo cierto es que el contenido de la ley 13.252 no decía mucho. Hablaba de la adopción simple, que implica que se mantenga la vinculación con la familia biológica, colocando al adoptado en un lugar un poco diferente al de los hijos comunes. Esto se notó a lo largo de los años y dio origen a una enorme preocupación.

A pesar de que aquella iniciativa recogió antecedentes como los de Castillo y Koll, no logró colmar las expectativas que se habían creado. Así vimos cómo, a partir de 1948, delictualmente se fraguaban certificados para conceder al hijo que no era propio los derechos de un hijo legítimo.

Esa situación se fue advirtiendo con mayor evidencia, lo que provocó que en 1971 se dictara la ley 19.134, que recogió toda la experiencia que se había vivido, incorporando al derecho la legitimación activa, la legitimación adoptiva o adopción plena. Tampoco fue suficiente. En el camino quedará la situación que hoy estamos padeciendo con relación a los menores: un tráfico muchas veces delictual y una enorme dificultad en los juicios de adopción donde quien sufría era principalmente el menor, además de los padres adoptivos.

Era un proceso engorroso y difícil, y por ello los legisladores desde hace años han buscado la manera de mejorar la ley 19.134, que ha quedado superada por las circunstancias. Es allí que sobre la base de la jurisprudencia que cada año el Poder Judicial de la Federación emite, el Poder Judicial de la Federación ha elaborado una nueva ley.

Entiendo que a los efectos de la ley propuesta que deberán realizar los jueces y los promotores de la defensa que actúan ante los tribunales de la Nación, quienes muchas veces

recurrirán a los antecedentes con las manos llenas de interrogantes para resolver las cuestiones que se les planteen—, debemos dejar establecida alguna suerte de aproximación acerca de la naturaleza jurídica del instituto que estamos considerando, que es esencialmente tuitivo, con normas que poseen características de orden público, y permiten constituir un nuevo esquema familiar estable. Al decir de los profesores Zanoni y Orquín, en su vocabulario predomina el carácter emplazatorio de la sentencia de adopción.

Esto es muy importante porque determina, en forma coherente, algunas consecuencias dentro del articulado de la iniciativa. La primera de ellas es la importancia de la intervención judicial: el poder, la carga, la facultad, pero al mismo tiempo el deber de los jueces, desde la guarda y durante todo el juicio de adopción, que se hace notar en el dictamen que traemos a consideración del cuerpo.

La segunda consecuencia de este instituto tuitivo es el acotamiento de la voluntad de las partes y el resguardo del consentimiento de los padres biológicos, que combinados implican consecuencias que se advierten con claridad en el dictamen en análisis.

En este sentido, cabe señalar lo dispuesto en el artículo 7º, donde se determina que bajo las condiciones de las garantías judiciales y de todos los aportes técnicos se requerirá el consentimiento de los padres dentro de los sesenta días subsiguientes al parto. Es decir, para los padres biológicos no habrá la premura, la urgencia o el temor de ese período especial, en que muchas veces —en particular la madre— sienten el peso del desamparo frente a la posibilidad de prestar un consentimiento del cual después se van a arrepentir toda la vida, dado que para eso estarán el juez, el ministerio público y todos los organismos del Estado vinculados al tema para que dicho consentimiento sea brindado de manera clara, transparente, definitiva e irreversible. Ello porque lo necesitan los padres biológicos, pero fundamentalmente el menor, porque la relación que el nuevo estado familiar crea en virtud de una ficción jurídica no puede verse conmovida por dudas o por consentimientos mal habidos.

Una de las reformas más importantes que se introducen al régimen de la ley 19.134 es que la intervención del juez aparece ahora precisamente en el momento de la guarda.

La otra consecuencia de este instituto de naturaleza tuitiva es la sentencia, constitutiva de un nuevo estado familiar. La sentencia coloca

al hijo en la familia adoptiva como si fuera un hijo de sangre de esa familia y corta los vínculos con la anterior para constituirse así un nuevo estado familiar. Esta es la consecuencia de la última característica de la naturaleza jurídica de este instituto, que es precisamente la irrevocabilidad, con las mismas causales de revocabilidad que prevé el artículo 307 del Código Civil con respecto a la patria potestad.

Efectivamente, lo que aquí estamos haciendo es asimilar al hijo adoptivo a las mismas características del hijo nacido dentro de su familia. Por eso, solamente es revocable con las características y causales previstas en el citado artículo del Código Civil.

Si nos quedáramos en esta mera interpretación, obviaríamos algo que va a ser fundamental para el análisis en torno de estas normas que vamos a sancionar, cual es la finalidad de este proyecto de ley.

La iniciativa en consideración contiene una finalidad principal y dos finalidades dependientes. La primera, a la cual debe acotarse toda la interpretación judicial, indica que este proyecto ha sido elaborado en beneficio de los menores; el protagonista principal es el menor. El segundo interés que se protege es dependiente del primero; se trata del interés de los adoptantes, que no puede existir sino en función de aquel primer interés, que es el de los menores. Esto es muy importante en la interpretación de la norma. La conjunción de ambos va a formar el estadio de la nueva familia, el ámbito de amor imprescindible con la seguridad necesaria para que se desarrolle el ser que se pretende proteger, que es el menor.

Finalmente está el interés de los padres biológicos; que no sean sometidos a robos y matoneos, de los que a diario nos enteramos por los periódicos. Es decir que el tercer interés consiste en rodear el consentimiento de los padres biológicos de seguridades, de tal manera que en ninguno de ellos haya una pizca de duda, vacilación, insinuación, chantaje, negocio o delito.

Señor presidente: la Argentina ha padecido y está padeciendo el despojo que a veces se hace de sus hijos abandonados, desamparados. Este proyecto de ley pretende decir que nosotros reconocemos los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales e incorporados hoy a la Constitución; lo hacemos en defensa de los integrantes de la sociedad argentina. Por eso, al mismo tiempo, hacemos la reserva, con la interpretación de muchas de las normas vincu-

ladas con la adopción. Esto es así porque protegemos el consentimiento de los padres biológicos.

¿Cómo hemos instrumentado algunos de los aspectos que aquí se señalan? Hemos tratado de dar seguridad y certeza. El proceso judicial comienza con la guarda y es precisamente el propio juez quien va a atender todos los reclamos.

También hemos brindado agilidad al flexibilizar la figura de la guarda, que puede ser de seis meses a un año. Es decir que hemos contemplado la posibilidad de acortar ese tiempo que generalmente es angustiante para los adoptantes.

Asimismo, desde el punto de vista instrumental hemos dispuesto la intervención del ministerio público, intervención absolutamente necesaria para garantizar las finalidades y la naturaleza jurídica que mencionamos.

A pesar de todo este trabajo —que creo ha sido importante— de las comisiones de Legislación General y de Familia, Mujer y Minoridad, con toda sinceridad debo decir que nos queda la sensación de que el Parlamento argentino sigue con una deuda en esta materia. Esa deuda está vinculada con otro aspecto de esta grave, difícil y sensible problemática.

Es evidente que este proyecto apunta a los menores recién nacidos, aunque dentro de su letra pueden encontrar lugar los más grandes. Sin embargo, ese lugar no va a ser el más apropiado. Será muy difícil aplicar esta norma para el caso de aquellos chicos que tienen nombre, apellido y memoria de su nacimiento, su primera niñez, sus padres y el primer ámbito social y cultural que los recibió. Ello constituye hoy un problema muy grave en nuestra Argentina. En consecuencia, nuestro desafío es continuar trabajando del mismo modo y con las mismas coincidencias para cubrir por medio de otra iniciativa ese sector de la niñez argentina que está desamparado en la actualidad y que a diario nos conmueve en nuestro paso por los distintos lugares públicos.

Junto con las señoras diputadas Roy, Sobrino y Leguizamón quedo a disposición del cuerpo para responder todas las observaciones y contemplar todas las flexibilizaciones. De modo que con estas advertencias y estos conceptos vertidos en general dejo presentado el informe respecto del dictamen en consideración, que solicito sea aprobado por los señores diputados. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Leguizamón. — Señor presidente: quiero agradecer las palabras del señor diputado preopinante y hacerme cargo efectivamente de este proyecto de ley que hoy nos convoca.

Quienes hemos tenido la dicha de haber podido contar en nuestra niñez con una familia felizmente constituida que nos brindó protección y sobre todo amor, sabemos lo invalorable que es eso para la formación de nuestra personalidad.

En la actualidad la familia está atravesando una etapa de gran crisis. En ese sentido, estoy convencida de que es nuestro deber cuidarla y protegerla porque es la fuente de donde surgen los valores necesarios para nuestra formación y el resguardo seguro en estos tiempos difíciles en los que el consumismo nos invade. Por ello, estoy convencida de que es la familia la que va a fijar nuestro rumbo futuro.

Por otra parte, la adopción está sacando a la luz la deuda que mantenemos con nuestra niñez, especialmente con aquella que está desprotegida y necesita un pilar que le permita crear vínculos.

Tenemos en claro que lo que buscamos es la protección de los menores, pero también el resguardo y la comprensión para con aquellos adultos que forman parte de este difícil proceso.

Con la reforma que proponemos se logra un avance en puntos trascendentales, cual es lograr la guarda judicial descartando a la notarial, que era la que imperaba hasta este momento, porque el interés del menor debe ser un principio que comprometa al juez al estudio de cada caso en particular, ya que la entrega en guarda con fines de adopción dependerá de la valoración que el funcionario realice en cada caso evaluando si ese beneficio se corresponde con la situación del menor, pero también entendiendo a éste como sujeto de derecho.

Estoy segura de que existirá algún beneficio para los menores cuando haya un vínculo jurídico que los contengan, pero también cuando reciban amor, afecto, educación y protección, a lo que también tienen derecho. Por supuesto esto sólo lo podrán ejercer a través de una familia. Por ello es el juez el encargado de construir esta relación tan difícil como es la familia, ya que determinará el futuro de todos los niños desprotegidos.

En el proyecto que se encuentra a consideración de la Cámara se reduce el término estipulado para la guarda, el que no será menor a seis meses ni mayor a un año.

A través de este texto legal intentamos concientizar a los padres adoptivos y también a la

sociedad en general sobre la necesidad de construir estas nuevas relaciones familiares sobre la base de la verdad.

La adopción no significa reemplazar la paternidad de sangre por aquella creada a través de la ley; por el contrario, lo que pretende es sumar ambas filiaciones, y el menor debe tener acceso y derecho a esa información. En razón de ello los niños deben conocer su realidad biológica, y los encargados de relatársela en un clima de afecto y respeto deben ser los padres adoptivos.

El proyecto que estamos considerando asegura al niño el derecho a conocer su historia, para que ese nuevo mundo que es la adopción avance en un clima de afecto que permita crear un verdadero vínculo familiar.

Asimismo, por medio de la iniciativa que estamos tratando logramos un avance jurídico, ya que a través de ella se podrán otorgar niños en adopción a matrimonios que cuenten con treinta años de edad, quienes podrán iniciar los trámites de guarda con fines de adopción. También, podrán solicitarla aquellas personas que cuenten con más de treinta años o matrimonios que tengan más de tres años de casados.

En el capítulo relativo a las nulidades se ha recogido una preocupación del conjunto de la sociedad, ya que se establece la nulidad absoluta de toda adopción que hubiese tenido como antecedente un hecho ilícito.

En coincidencia con la incorporación en nuestra Constitución de la Declaración de los Derechos del Niño y del derecho de identidad consagrado en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, la reforma que proponemos se basa en dos pilares fundamentales: el interés del niño y su derecho a la identidad.

Sabemos que un niño desprotegido es caldo de cultivo para los males de la sociedad. Es, entonces, nuestro deber protegerlo. La familia es el único medio de contención frente a estos males que avanzan sobre la sociedad. Ella puede reconstruir los lazos afectivos y los puentes generacionales para frenar el avance de estos males sociales que atacan a nuestros niños y que pueden condenarnos a una sociedad de consumo estéril donde es difícil encontrar horizontes claros.

La existencia de niños solos hoy, significa el riesgo de que tengamos más adelante adultos antisolidarios y egoístas. Debemos garantizar a nuestros niños un futuro cierto, un camino libre del consumismo y del materialismo.

Les pido que intentemos incorporar este léxico en nuestro modo de comunicar diario. Me resulta impensable un Estado en el que no po-

Vamos defender el pilar fundamental de la sociedad que es la familia. Ese pilar fundamental es el punto de partida para la sociedad solidaria que todos soñamos.

Estoy convencida de que lo esencial no pasa ni por el consumo ni por el dinero ni por el poder, sino que pasa por la vida del corazón, de los afectos y de nuestros sentimientos. Su Santidad, el papa Juan Pablo II, nos enseña en la encíclica *Centesimus annus* que frente a la cultura de la muerte, la familia es el santuario de la vida.

Por ello, ante ustedes y ante la sociedad, asumo con creciente responsabilidad el compromiso de realizar los máximos esfuerzos para que el ámbito familiar vuelva a cumplir su función de núcleo transmisor de los valores de la cultura y los principios trascendentes que nos deben acompañar por el resto de nuestras vidas. *(Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan a la oradora.)*

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Roy. — Señor presidente: llego hoy a este recinto movilizada por muchos y muy diversos estados emocionales que fueron signados por los distintos avatares por los que debió transitar este proyecto de ley que posiblemente sancionará la Cámara de Diputados.

Debo agradecer las palabras del señor diputado Dumón, quien efectivamente integró nuestra comisión en 1990. Vengo bregando por este proyecto desde 1988 —apenas incorporada a esta Cámara— porque no hay un acto de amor más pleno y perfecto que el de adoptar un hijo. Tal vez mi labor se vincula con mi propia necesidad de dar amor y afecto. La vida sólo me permitió tener una hija y a través del nacimiento de ella desde mí pude explicar la palabra milagro.

Creo que es una bendición de Dios tener muchos hijos, pero cada uno de nosotros está signado; tenemos un destino que debemos cumplir y hacia él vamos.

Estoy profundamente agradecida a todos los integrantes de la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad, que es una de las comisiones más pluralistas —ideológicamente hablando— de esta Cámara, y fundamentalmente a los hombres que participan en ella. Digo esto porque es necesario tener un grado de sensibilidad muy especial para comprometerse con problemas humanistas en una Cámara en la que estamos acostumbrados a tratar proyectos de contenido político o económico, postergando permanentemente todo lo que tenga que ver con lo humanístico, que pareciera ser una cuestión de segundo orden.

Pero no son de segundo orden los niños que necesitan ser adoptados; no lo son las madres y padres que quién sabe por qué razones se ven motivados a dar sus hijos en adopción; no lo son los que necesitan tener un hijo para darle amor. Conozco a muchos integrantes de este cuerpo que han tenido la generosidad de ser padres adoptantes y sienten por sus hijos el mismo orgullo que sentimos los que somos simplemente padres biológicos porque Dios nos ha marcado este destino.

El proyecto de ley en consideración podrá ser perfecto pero no habrá más bebés para adoptar. Los niños no nacen por generación espontánea. Lo que debemos hacer es lograr una amplia difusión de los valores de la adopción hacia la comunidad a fin de que el niño no sufra la discriminación de que es objeto sistemáticamente cuando se sabe que es adoptado. Por eso es que los padres adoptantes prefieren que se trate de un bebé porque —contra todo lo indicado desde el orden psicológico— luego engañan al niño diciéndole que ha nacido en ese hogar. Pero ocurre que el niño sabe desde el comienzo —y esto está comprobado científicamente— que el corazón cuyos latidos escucha no son los de su madre biológica. En Inglaterra se han hecho experiencias de grabar los latidos de los corazones de las madres después de parir para hacérselos escuchar a los bebés que lloran en la *nursery*, y éstos, cuando oyen los que corresponden a su mamá biológica, se calman. Es como si la madre estuviera llamando a su bebé, como si le estuviera diciendo:

“Cálmate, hijo mío, que aquí estoy, cerca tuyo, para protegerte.”

Esto demuestra que es un error no decirles la verdad. Por eso en este proyecto de ley se establece el derecho de conocer el propio origen biológico a los jóvenes que tengan 16 años cumplidos, dato que deberá ser celosamente mantenido en los juzgados donde fueron dados en adopción. De este modo los jóvenes pueden transitar con total tranquilidad la etapa traumática de la adolescencia, en la que muchas veces sus compañeros dicen peyorativamente a alguien que ha sido adoptado que no puede opinar precisamente por ese motivo.

Es necesario evitar el dolor que producen esas actitudes, porque es imposible remediar la angustia que ante ello siente un joven de 15 o 16 años que ha sido adoptado y criado en un hogar en el que recibió todo el amor, la protección, el cuidado y la educación que necesitaba por parte de un hombre y una mujer que comenzaron a vivir al servicio de un hijo que

Dios tuvo a bien poner entre sus manos cuando apenas tenía unos días de vida. Existen mitos y falsas suposiciones en esta materia. ¿Por qué habiendo tantos niños carenciados resulta tan engorroso el trámite para adoptar? ¿Por qué la burocracia impide la adopción? ¿Por qué se promueve de esta forma la compraventa de menores o la adopción por izquiera? Todo esto no es cierto, señor presidente. Los niños carenciados generalmente no son bebés. Necesitan de esa cueda de amor y de contención igual que todos los chicos. Están desprotegidos desde el afecto, por más que se encuentren en el mejor hogar sustituto o en el mejor instituto, con todos los resguardos que hoy poseen estos menores gracias al director de Minoridad y Familia de nuestro país, doctor Atilio Alvarez, a quien las mujeres argentinas agradecemos la labor que realiza desde esa área.

Las estadísticas indican que no podemos hacer un cambio de sectores sociales, que no podemos convencer a las madres de que por el hecho de que se lleve a un chico a un hogar de mejor posición económica, él va a estar mejor. No es cierto.

Nadie es mejor que la mamá, por muy pobre que sea. Llegada la necesidad de dar al niño en adopción, que exista el resguardo para los padres adoptantes en cuanto a que no se puede volver atrás después de esta instancia. Por eso la norma señala la obligatoriedad del juez de hacer comparecer a los padres que dan al niño en adopción, para que sepan a qué se atienen. No obstante, se reservan los primeros 60 días —que es el tiempo del puerperio—, cuando esta joven no está plenamente capacitada para dar su hijo en esas condiciones.

Lo expuesto brillantemente por el señor diputado Dumón y bellísimamente por María Laura me exime de extenderme mayormente en este proyecto que acaricié durante tantos años y que estoy a punto de ver convertido en realidad.

Agradezco a Dios la posibilidad que me brinda; Dios es muy bueno con una; debe ser que una se porta bien con El. No quiero terminar sin decir unas palabras muy bellas, escritas por una mujer nicaragüense, que se llama Gioconda Belli, quien le habla a su hijo con estas palabras: "Andá mi amor. Yo voy también aunque me quede lejos, y estaré con vos en el viento y en la lluvia, en el calor del mediodía, en las tapitas del dulce, en las chicharras y los grillos y en el peligro; allí donde andes andará, y tu sombra habrá siempre una mujer acariciandote". (*Apiancos*.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Fernández Meijide. — Señor presidente: hace poco escuchaba al señor diputado Dumón y a la señora diputada Roy hablar sobre las dificultades que tuvieron aquellos que se desempeñan desde hace ya algún tiempo como legisladores de la Nación para llegar a concretar esta ley. Cuando ingresé a este cuerpo también tenía la idea de lograr una ley de adopción y, sabía que sobre la materia había muchos y buenos proyectos. Me preguntaba por qué era tan difícil llegar a legislar sobre esta cuestión que afecta a numerosos hogares de nuestro país.

Haberlo logrado en la actualidad significa que poco a poco esta sociedad está abandonando la idea de que el niño está para exclusivo uso y beneficio del adulto, o de que el niño es, en todo caso, un ser que algún día será grande. En realidad, es exactamente al revés: todos tenemos un niño dentro que fue madurando y que envejecerá luego de haber hecho más o menos cosas durante su vida. Ese niño es el germen del adulto del futuro. Aunque esto parezca una verdad de perogrullo es importante señalar que cuando los antropólogos hablan de la aparición de las necesidades comunes a todos —razón por la cual se transforman en derechos— citan en primer lugar la subsistencia, luego la protección del techo o la cueva —según fuera el lugar—, y por último el afecto.

Después aparecen otros derechos que van surgiendo como diversas necesidades a raíz de la complejidad de la sociedad; pero la subsistencia, el techo o abrigo y el afecto son tres derechos tan elementales que tienen que ver estrictamente con los adultos cuando fuimos "chiquitos". Asimismo, mucho tiene que ver el adulto que resulta después de que se hayan atendido o no esas necesidades que el chico requiere.

Volviendo a mi pregunta creo que esta sociedad ha podido liberarse de mucha agresividad, de mucho autoritarismo, de la poca contemplación de los derechos de aquellos que no podían presionar con su opinión o su acción, es decir, los niños. Sin embargo, creo que aún no se han superado por completo ciertos rasgos de autoritarismo y desprecio por los derechos de los demás, ejemplos de lo cual desgraciadamente se encuentran a cada rato.

De todas formas vamos evolucionando; este Congreso, que no será una maravilla ni una joyita, de todas formas es el ámbito que nos

supimos dar para ir discutiendo y consensuando nuestras leyes con mayor o menor participación, pero en todo caso con mayor trabajo del que la generalidad de la gente supone. En ese sentido, rescato el trabajo que hacemos y vale la pena señalar que por fin hemos logrado avanzar hacia la sanción de una ley de adopción.

Como se marcó recién con claridad, me parece que uno de los grandes conflictos que había en el tema de la adopción era si se privilegiaba el derecho de los adultos —generalmente un matrimonio— de llenar un vacío creado por la falta de hijos, o si se contemplaban prioritariamente las necesidades ya mencionadas de un niño abandonado o carente de padres.

Pienso que hasta ahora nuestra sociedad funciona, y seguramente lo seguirá haciendo, atendiendo más a las necesidades de los adultos que a los derechos del niño. Sin embargo, esta norma apunta a facilitar la adopción legal, aunque dudo que alcance a eliminar los casos de adopción extrajudicial. Estos hechos, desgraciadamente, seguirán ocurriendo; sería deseable que las instituciones de la sociedad contemplaran todos los casos.

Seguramente las instituciones deberán mejorar, pero sabemos que existe un problema: hay muchos más adoptantes en listados que niños a ser adoptados. Que haya niños con carencias no significa que estén estrictamente en situación de ser adoptados. Pueden estar viviendo en su núcleo familiar y objetivamente tener fuertes carencias.

Todos sabemos que en el proceso de adopción hay tres factores principales: uno es el niño, otro es la familia adoptante y el tercero es la familia biológica. Muchas veces se ha optado —y se seguirá optando a pesar de la ley— por no tener en cuenta a la familia biológica y que el niño sea entregado a la familia adoptante.

Creemos que debe hacerse un gran esfuerzo, y esto tiene que ver con una cultura social. Estamos promoviendo una ley pero estoy segura de que una sola ley no va a cambiar una cultura social que puede tener que ver con la acción por afuera de la ley, con el escamoteo de la verdad al niño, algo que nosotros queremos o intentamos subsanar desde este régimen cuya aprobación proponemos.

Tenemos que estar convencidos de que este régimen es el mejor, a fin de aprobarlo; pero, además, para que cada uno de nosotros sea motor del cambio cultural en la sociedad, que tiene que ver con la recepción de esta ley. Si no, todo será inútil y se seguirá buscando la

adopción a través de métodos que facilitarán una de las situaciones que queremos evitar.

Todos sabemos que hasta no hace mucho tiempo en la Argentina se podían producir hechos delictuosos con respecto al robo de niños, pero no se producía un tráfico de menores tan intenso como el que ocurre ahora. Ese tráfico que podríamos denominar internacional se producía en otros países latinoamericanos, como Colombia y Paraguay. Pero desgraciadamente la Argentina ha entrado a formar parte de esa cadena de tráfico internacional. Los niños argentinos son producto de venta en los mercados internacionales. Incluso, con la aparente y honesta intención —así lo quiero creer— de atender las necesidades del Sur hambreado, se están propiciando leyes internacionales de adopción. Espero que nuestro país nunca vuelva hacia atrás en su decisión de no suscribir ese tipo de iniciativas.

Este proyecto de ley que estamos considerando debe ser complementado por normas que prescriban la publicidad de la lista de postulantes a la adopción, a fin de que se respete un orden y nadie se anteponga a quien estaba anotado con anterioridad.

Todo lo que he comentado se relaciona con la obligatoriedad a cargo del Estado —ese es mi criterio y lo discutiremos más adelante— de la identificación de todos los bebés nacidos en hospitales, ya que se trata de una herramienta que tiende a evitar el robo y el tráfico de niños.

Todos saben que existen organizaciones que se esconden detrás de estudios profesionales y que instan a las parteras y enfermeras para que descorazonen a las jóvenes adolescentes de conservar la guarda de sus hijos. Generalmente las inducen a entregar a los recién nacidos en forma extrajudicial, porque se trata de un comercio.

Con este proyecto de ley vamos a facilitar, por un lado, la adopción; por el otro, aseguraremos que el niño vaya a un hogar en el que se le brinde seguridad, protección y afecto para su desarrollo, y no se satisfaga la necesidad narcisista de un adulto que requiere a lo mejor de un niño para cuidarlo.

Por otro lado, la intervención judicial desde la guarda responde a la protección del menor. Se trata del tiempo que concedemos para que el niño y el adulto adoptante se empueren a conocer entre sí y establezcan ese vínculo al que se había referido la señora diputada Roy, cuando hizo mención de la anécdota del doctor Winicott, quien comprobó —al colocar a varios

recién nacidos en una *nursery*— que cuando los bebés lloraban bastaba hacerles oír el registro magnético de los latidos del corazón de la madre para que dejaran de hacerlo. Esto demuestra que los nueve meses en el vientre de una madre tienen que ver con lo que se denomina el apego. Por ello es necesaria esta guarda protegida, a fin de que exista esa relación entre el adoptado y el adoptante. De lo que se trata es de que el niño vaya perdiendo esa sensación de oír el latido del corazón de su madre y se acostumbre a otro.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 29 de la Honorable Cámara, doctor Horacio Daniel Usandizaga.

Sra. Fernández Meijide. — Hubiera preferido que la guarda hubiera sido de un año antes de concederse la adopción. De todas maneras vamos a votar favorablemente este proyecto de ley, pero solamente porque creemos que el apego es importante y debe estar protegido. También hemos puesto especial cuidado en la familia biológica, sobre todo en la madre, estipulando que no se puede entregar al recién nacido hasta después de terminado el puerperio.

En este sentido, todos sabemos de la depresión posparto, durante la cual muchas madres desprotegidas, que no saben qué hacer con sus hijos, los entregan por una cuestión de sensibilidad de la que luego se arrepienten. No voy a exponer otros aspectos sobre este tema porque ya la señora diputada Roy los ha explicado claramente.

También se ha previsto la posibilidad de citar a los padres biológicos —madre o padre— a efectos de que presten su consentimiento para la adopción, así como para garantizar el núcleo familiar que se iniciará a partir de allí. En una palabra, antes que un corte abrupto vale más la agregación de afectos y de pertenencias —la de la familia biológica más la del adoptante—, para que al niño lo avale una mayor protección, afecto y cuidado. Pues aun cuando la adopción plena no sea revocable, se ha dado el caso de niños adoptados cuyos padres los han devuelto. Si la adopción es irrevocable, el niño queda librado a su propio destino.

Habrán notado, señores diputados, que la mayoría de los que hemos hecho uso de la palabra hasta ahora hemos sido mujeres, a pesar de que en las comisiones que intervinieron en el estudio de este tema había hombres, que por cierto se desempeñaron muy bien; pero pareciera que aún nos queda ese resabio que indica que de las cosas de los chicos hablan

las mujeres; y si no que lo diga el señor diputado Alfredo Bravo, que se borró despavorido de la lista de oradores diciendo que de esto no hablaba. (*Risas.*)

Quiero agradecer a los legisladores por la atención que me han brindado, así como también a quienes compartieron conmigo la discusión en las comisiones respectivas, a pesar de que poco pude concurrir a los debates por los tres meses que duró la Convención que se reunió en la ciudad de Santa Fe, a la que asistí como convencional constituyente. Por sobre todo desco agradecer a los asesores que trabajaron con profundidad en este tema, muchos más allá de lo normalmente exigible. Ello se ha debido quizás a que el asunto es sumamente importante para cada uno de nosotros. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Usandizaga). — Tiene la palabra la señora diputada por Salta.

Sra. Maidana. — Señor presidente: en nombre del grupo de partidos provinciales integrado por el Partido Renovador de Salta, el Movimiento Popular Fueguino, el Movimiento Popular Neuquino, Acción Chaqueña y el Partido Bloquista de San Juan, quiero manifestar que adherimos al proyecto de ley sobre adopción suscrito por la mayoría en las comisiones de Legislación General, de Familia, Mujer y Minoridad y de Justicia.

Me complace profundamente participar en este debate que dará lugar a la sanción de un proyecto que está en directa relación con un tema muy caro a mis sentimientos; sentimientos de mujer, al fin, como lo hacía notar la señora diputada que me precedió en el uso de la palabra. Además, para mí es una satisfacción poder intervenir por primera vez en este recinto en torno a un tema tan humano como es la búsqueda de la protección para los menores abandonados.

Nos estamos ocupando de una institución fundamental en el derecho argentino, cual es el régimen de adopción de menores. Estamos modificando ese régimen, pues entendemos que la ley vigente adolece de serios defectos.

En estos tiempos en que de una u otra forma la realidad nos golpea dura y diariamente, porque nos enteramos de hechos criminales cuyas víctimas son menores, toda iniciativa que tienda a protegerlos merece y merecerá siempre nuestro apoyo incondicional.

Como lo demuestra el dictamen, en el seno de las comisiones se ha llevado a cabo un profundo estudio de la institución. En la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad hemos efectuado ese análisis con la invalorable ayuda de las

señoras y señores asesores: destaco con toda justicia el trabajo que ellos han realizado por lo metódico de la investigación y el empeño que han puesto de manifiesto.

No se dejó de lado ningún aspecto de la institución —social, psicológico, jurídico o metodológico— que tuviera implicancia en el interés del menor y en la constitución de la familia adoptiva. Para la doctrina, adoptar es recibir como hijo al que no lo es por naturaleza; es decir que se busca emplazar en el estado de hijo a un menor de edad que se encuentra en una situación de desamparo por parte de su familia biológica. En consecuencia, hay que proteger al menor en situación de desamparo, brindándole una familia; ésta es, pues, la esencia de la institución.

Cuando hablamos de familia nos estamos refiriendo al grupo afectivo que contiene, y en el que se ejercitan derechos y se cumplen obligaciones; el respeto entre quienes conviven en ella protege la intimidad, la privacidad, la opinión y hasta el desacuerdo de todos y de cada uno de sus integrantes. Sólo este medio permite al infante, al niño y al adolescente crecer en todos los sentidos y desarrollarse física y psíquicamente en cada una de esas etapas.

Se ha dicho que el hombre es el arquitecto de su propio destino, pero esta es una definición que contiene una verdad a medias. Ese hombre edificará su obra sobre cimientos contruidos por otros, y no siempre por manos expertas y cuidadosas. De allí que este planteo nos convoque a concebir la adopción como una institución que brinde al adoptado la protección que buscamos.

Para comprender el espíritu de esta reforma cabe remarcar —como ya lo han hecho los señores diputados proponentes— cuáles son las modificaciones más importantes que se introducen al actual sistema. A continuación me referiré brevemente a ellas en homenaje al tiempo.

Considero muy importante el requisito de la residencia mínima en el país. Esta disposición debe interpretarse con referencia al extranjero, y en ese sentido la norma exige tres años de residencia anteriores a la petición de la guarda. De este modo se pretende evitar la exportación de niños argentinos, la compraventa de niños con destino a otros países. Esto constituye una realidad y un grave problema que no podíamos soslayar en esta oportunidad, habida cuenta de que la Argentina viene siendo un blanco preferencial en la búsqueda de niños para adoptar, lo cual en algún sentido nos entristece.

Otra modificación que corresponde destacar es la ductilidad del texto del proyecto con respecto a la disminución de la edad del adoptante, que en la ley vigente es de 35 años y en esta iniciativa se reduce a 30. Asimismo, para el caso de los matrimonios, se reduce de 5 a 3 años la exigencia del período de estado matrimonial.

Como se advierte en el proyecto, hay un claro rasgo de flexibilización para que los adoptantes se dispongan a recibir en su seno a ese menor que está necesitando de su protección y cariño.

La jerarquización de la guarda es otro punto a destacar de esta iniciativa. De acuerdo con la ley vigente la guarda se puede obtener de cualquier forma. En cambio, para el proyecto en consideración se necesita formalmente la intervención judicial. Según este texto el juez tendrá un protagonismo esencial y un trato personal con los adoptantes y los adoptados.

En el marco del procedimiento del juicio de adopción encontramos dos etapas. Una de ellas es la guarda que, como ya hemos señalado, será precedida por un acto jurisdiccional que tiene todas las formas y el valor de la sentencia judicial. La prolongación del juicio de adopción terminará por supuesto en la sentencia de adopción.

Esta modificación no tornará más largo ni más engorroso el camino de la adopción. Por el contrario, la va a facilitar, porque las normas a regir serán claras en ese sentido.

Otra modificación de jerarquía que se propone en el proyecto en consideración es la participación obligatoria de los padres del menor adoptando. Señalo especialmente esta situación porque la ley que ahora estamos modificando no lo establece como una obligación sino como una facultad de la que disponía el juez, que podía usarla o no. Ello significa que si los padres no son citados porque el juez entiende que no cabe la intervención de éstos, no serán parte del juicio de adopción, que igualmente puede terminar en una sentencia de adopción. Este procedimiento sería como quitar un hijo sin que intervengan el padre y la madre o alguno de ellos.

En la ley vigente el derecho de defensa de los padres biológicos es facultativo, lo cual es peligroso y sumamente grave. El artículo 11 de la ley 19.134 establece que podrá no admitirse la presentación espontánea de los progenitores cuando hubiesen manifestado expresamente su voluntad de que el menor sea adoptado, y dicha manifestación constara en un instrumento público. Ello significa aceptar supuestas renuncias

a la paternidad, maternidad y a la patria potestad, lo que representa una violación a la garantía de la defensa en juicio.

En el proyecto en consideración no quedan dudas de que los padres del menor son parte esencial del juicio de guarda, salvo que estuviese en un establecimiento asistencial y sus padres se hubieran desentendido totalmente de él durante el término de un año o cuando el desamparo moral o material resultase comprobado por la autoridad judicial.

Asimismo, en la iniciativa que estamos tratando se corrige lo relativo a la irrevocabilidad a la que hacía referencia el artículo 12 de la ley vigente, ya que ésta —como los señores diputados podrán advertir— crea un vínculo superior al de sangre. Por ello, y a efectos de zanjar esta situación, se ha dispuesto que la adopción plena sólo podrá ser revocada por sentencia judicial y por las causales establecidas en el artículo 307 del Código Civil referidas a los casos de privación de la patria potestad. De esa manera queda a salvo la lógica que conlleva todo ordenamiento jurídico así como también el interés del adoptando y del adoptante.

Corresponde resaltar la importancia que reviste declarar la nulidad absoluta de aquella adopción que tuviese como base un hecho ilícito, incluido el abandono supuesto o aparente del menor, proveniente de la comisión de un delito del cual hubiese sido víctima él o sus padres.

Para concluir con mi exposición quiero recordar al profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, doctor Julio López del Carril, quien señaló que cualquier ley vinculada con la familia o la filiación debe tender a solucionar problemas sociales en determinada sociedad, en determinado momento y reafirmar los principios morales que sostengan los derechos y obligaciones dentro del orden público.

Por todo lo expuesto y porque creo que este proyecto va a servir para resolver los problemas que actualmente padece nuestra sociedad, con gran cantidad de chicos de la calle y menores abandonados, me pronuncio a favor de su sanción. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Usandizaga). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Ayetz. — Señor presidente: la Argentina necesita de una nueva ley de adopción y esta Honorable Cámara se ha hecho eco de esta urgente necesidad, que es la de una sociedad en constante transformación y en cuyo seno este tema posee una vital importancia, por lo cual no puede sufrir dilaciones.

Los proyectos contenidos en los expedientes 2.238-D-93, 259-D-94, 526-D-94, 1.434-D-94, y otros, que han sido compatibilizados en las comisiones intervinientes con un despacho que mi bloque ha suscrito, nos dan una idea de la seriedad, la voluntad y el deseo ferviente de los legisladores de sancionar esta norma tan esperada que regulará las adopciones con un alto espíritu de protección al menor.

La realidad nos arroja como dato ineludible la creciente necesidad que existe en muchas parejas, imposibilitadas de procrear por distintas razones, de contar con un hijo. Por otro lado, el Estado debe facilitar mediante un sistema ágil, flexible y seguro, que menores sin hogar puedan encontrar un núcleo de pertenencia que les brinde el afecto y los afirme en un desarrollo armónico y feliz.

Nuestra Carta Magna, cuyas modificaciones han sido aprobadas recientemente, integra en su texto los derechos del niño otorgándoles rango constitucional, lo que abre las puertas para el dictado de leyes y normas que contemplen efectivamente la protección del menor en situación de abandono.

El proyecto en tratamiento prevé solventemente parte de esa problemática en lo vinculado específicamente al sistema de adopciones. De allí que de su texto se desprendan regulaciones como las referidas a la edad que debe mediar entre adoptante y adoptado, al establecimiento de requisitos para acceder a la adopción, al lapso de guarda, establecido en seis meses como mínimo, a las condiciones que deberán reunirse para acceder a la guarda, a los elementos que deberán mediar en el juicio de adopción, al efecto retroactivo de la sentencia cuando ésta se encuentre acordada, a la sustitución de la filiación, pasible de ser revocada sólo mediante sentencia judicial, al mecanismo de asignación del apellido, a la posibilidad de que el adoptado pueda conocer su realidad biológica a partir de los 16 años, al posicionamiento como hijo biológico que adquiere el adoptado, a la no extinción de los vínculos de sangre en lo atinente a derechos y haberes, a la regulación del modo de acceso a las herencias, a los presupuestos para la revocabilidad de la adopción simple y al establecimiento de las condiciones que determinan las nulidades en la adopción, entre las que tiene gran significación la relacionada con las que surjan de ilícitos.

Todos estos aspectos nos indican el trabajo minucioso y solvente realizado sobre el tema que nos convoca.

Por lo expuesto, el bloque del MODIN apoya en general el dictamen que ha sido consensuado, sólo como un medio de llegar a un mecanismo más integral de protección al niño, tal como se expresa en el artículo 75 de nuestra Carta Magna, destacando que las observaciones que nos merece serán expuestas por el señor diputado Gallo.

Estamos absolutamente convencidos de que en el tratamiento de este proyecto no han mediado mezquidades políticas y si un legítimo interés en la protección de los menores. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Usandizaga). — Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

Sra. Sobrino. — Señor presidente: al tratar el tema de la adopción no podemos dejar de referirnos a su antecedente más frecuente: el abandono del menor. Este problema se vincula con la falta de políticas sociales que necesariamente deberían acompañar las medidas de ajuste económico implementadas por el actual gobierno nacional. La responsabilidad indelegable del Estado en esta materia no se advierte vehiculizada a través de programas que permitan a todas las madres atender dignamente a sus hijos, en el sentido de satisfacer y asegurar sus necesidades básicas.

El abandono no lo sufre únicamente el niño sino también las mujeres embarazadas que están solas, las familias y todos los que por estar sumidos en situaciones de pobreza crítica no cuentan con los recursos mínimos indispensables para hacerse cargo de la responsabilidad que implica una crianza y el amparo de sus menores allegados.

Las políticas de ajuste traen aparejado el crecimiento de bolsones de pobreza y marginalidad, así como la aparición de nuevos pobres, que serían —según expresa la UNICEF— aquellos que alguna vez fueron de clase media y hoy se encuentran con sus necesidades básicas insatisfechas.

Sabemos que entre 1950 y 1975 se duplicó la población de los veinte países de América latina, lo cual no significa que en nuestro país existan problemas de alta densidad demográfica sino todo lo contrario. Pero este dato debe hacernos reflexionar sobre la imposterizable necesidad de que existan programas sociales que presten especial atención a la protección y asistencia de niños, y jóvenes en particular, así como de sectores desfavorecidos en general. En este aspecto las normas jurídicas —como la que hoy procuramos sancionar— constituyen una respuesta posible. Por ello, al ponerse en consideración este nuevo proyecto de ley es ne-

cesario que en el texto queden afirmados los derechos del niño, porque creemos que la adopción es uno de los caminos más adecuados para proveer de una familia a un niño que carece de ella. El fin de esta institución es —como ya lo han expresado quienes me precedieron en el uso de la palabra— responder a las necesidades del menor, permitiéndole encontrar un ambiente protector y afectivo satisfactorio que le asegure una formación armónica.

Numerosos estudios han demostrado que la aceptación, el afecto positivo y la seguridad de un grupo de pertenencia estable son las condiciones básicas para un saludable crecimiento y una formación equilibrada. Durante el peor período de la Segunda Guerra Mundial se comprobó en Londres que a los niños acompañados por sus madres biológicas o por sus madres sustitutas, a las que conocían, las situaciones traumáticas no los afectaban como a los niños solos. Esto es sólo un ejemplo, analizado por Anna Freud, para reflexionar sobre otras situaciones traumáticas como las que viven muchos niños de nuestra sociedad a partir de situaciones de desempleo, carencia nutricional y marginalidad, que perturban seriamente el tejido social, suscitando desamparo y desequilibrios psíquicos de diferente naturaleza.

Como ya se ha explicitado, en la adopción hay tres partes involucradas: "los padres biológicos, los adoptantes y, en el centro de la escena, el niño". Nuestra mira está puesta en él, en su bienestar, porque como dijera Cristiane Rechfort, "de todos los oprimidos que poseen el don de la palabra, los niños son los más mudos".

Hoy está científicamente aceptado que el auténtico afecto, ligado al deseo de tener un hijo, es un requisito tan fundamental para su desarrollo armonioso, como el abrigo y la comida. Así como la correcta alimentación incide en la salud física y la nutrición insuficiente ocasiona un escaso desarrollo corporal —además de trastornos de diferente tipo—, del mismo modo el equilibrado desarrollo de la personalidad se vincula con la calidad y autenticidad del afecto que el niño incorpora a lo largo de su vida.

El cariño recibido determina diferencias que entre otras cosas se asocian a la seguridad o inseguridad que se experimenta, así como a la aparición de perturbaciones psicológicas de diversa gravedad.

La provisión de bienes materiales, la higiene y la carencia de normas no reemplazan a la contención afectiva. El antiguo dicho "Dañe

un punto de apoyo y moveré el mundo" puede servirnos de metáfora para pensar en la fuerza que proporciona un punto de partida firme y seguro.

El origen de todas las relaciones interpersonales se encuentra en esas vivencias infantiles que contaron o no con tal apoyo psicológico. La salud mental y el equilibrio psicosocial de muchos argentinos del siglo XXI dependen hoy de este tipo de factores a los que creemos que esta nueva ley brindará un aporte positivo.

Cuando el Congreso Nacional ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, convirtiéndola en ley 23.849, que cuenta hoy con rango constitucional, sancionó el reconocimiento de los derechos intrínsecos a la vida, al nombre, a las relaciones familiares y a la identidad (artículos 7º y 8º).

El derecho del hijo a conocer a sus padres biológicos después de un proceso de adopción se deriva como consecuencia inmediata de lo anteriormente expresado. Con la ratificación de la convención aludida —y aun antes, gracias a la importante doctrina nacional e internacional— se reconoce al niño como un sujeto de derecho. Este es el sentido que queda plasmado en el artículo 17 del proyecto que tenemos en consideración.

El derecho a la identidad comprende no sólo el estado civil, sino también la nacionalidad, el nombre, y el derecho del niño a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Este derecho tiene que ver con la preservación de la salud mental y nos remite al más ancestral de los interrogantes: el que se pregunta acerca del ser que se es, porque el derecho a la identidad es el derecho a ser auténticamente quien se es.

Los seres humanos vamos mutando en el tiempo. El espejo que nos refleja es siempre el mismo pero no es lo mismo lo que refleja; por eso el derecho a la identidad es el derecho a la memoria.

Las otras partes implicadas —los padres biológicos y los adoptantes— también son motivo de nuestra consideración. Cuando pensamos en la modificación de la ley 19.134, estimamos que el modo que brindaría más transparencia a este proceso era que el otorgamiento de la guarda con miras a la adopción la realizara el juez, como ya ha sido expresado. En este sentido, tuvimos en cuenta las conclusiones de las IV Jornadas de la Magistratura Argentina celebradas en la ciudad de Mar del Plata en 1980.

El artículo 7º del proyecto exige que el plazo de guarda sea aprovechado por el magistrado para la citación de los padres del menor a fin

de prestar su consentimiento para la adopción de su hijo. Con el objeto de contemplar los intereses de las partes involucradas hemos estimado conveniente la citación de los padres biológicos en este momento, dado que si el consentimiento ya fue brindado durante esta instancia previa al juicio, no será necesaria su nueva citación durante la tramitación del proceso. Es en este sentido que deben interpretarse los recaudos que hoy la guarda judicial tiene en consonancia con el artículo 10, inciso b), del proyecto, donde se expresa que son partes en el juicio el adoptante y el ministerio público.

En los demás casos, es decir, cuando los padres hayan sido privados de la patria potestad o se hayan desentendido del menor por el término de un año, y el mismo se encontrase en un establecimiento público o privado, no será necesaria dicha citación.

En el artículo 7º ya citado también se establece que el juez determinará dentro de los 60 días posteriores al nacimiento, la oportunidad de la citación de la madre a fin de prestar su consentimiento para la adopción. El propósito de la espera de este plazo por parte del señor juez, en quien se confía que no lo haga en los primeros días, tiene su origen en lo que es doctrina penal conteste respecto del estado de puerperio. En este sentido, la medicina legal considera que la madre se encuentra en un estado emocional que, en muchos casos, no le permite discriminar respecto de las decisiones a las que puede arribar en ese lapso. Recordemos —es muy importante que así lo hagamos— que la psicopatología señala la frecuencia de las depresiones puerperales como un hecho comprobado. Tanto es así que en la comisión del delito de infanticidio de la mujer, durante el estado puerperal, se le reduce la pena de la que sería pasible en otro momento diferente.

Es por ello que consideramos que a pesar de la redacción que tiene hoy el artículo 7º, debería el juez esperar el vencimiento de los 60 días a fin de citar a la madre a partir de este plazo y no antes, ya que de lo contrario estaríamos obligando a que la misma se pronuncie cuando todavía está bajo los efectos del puerperio.

Es nuestra responsabilidad hoy como legisladores la tarea de equilibrar los intereses y pasiones en juego, y así lo asumimos haciendo nuestras las palabras de Joaquín Ruiz Giménez, presidente del comité español de la UNICEF, quien expresó que "en la historia de los derechos de los niños se suceden y se entrecruzan ideales

nobles y generosos, así como manifestaciones crueles de la realidad. Es en definitiva un largo camino que se debate entre el dolor y la esperanza." (*Aplausos*.)

Sr. Presidente (Usandizaga). — Se va a votar en general.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Usandizaga). — En consideración en particular el capítulo 1, que incluye los artículos 1º al 11.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gallo. — Señor presidente: como integrante de las comisiones de Legislación General y de Justicia he suscrito este proyecto de ley en disidencia parcial, que voy a mantener en tres artículos, dos de los cuales forman parte de este capítulo 1 que estamos considerando.

Desde ya aclaro, en honor a quienes me precedieron en el uso de la palabra en la fundamentación de este proyecto, que el objetivo que se persigue con esta reforma apunta a posibilitar una mayor fluidez en la adopción, otorgando una mayor amplitud a la norma y una mayor seguridad y protección en lo referente a la libertad de los menores.

El artículo 5º del proyecto aprobado en general, que contara con dictamen favorable de las tres comisiones que se abocaron a su consideración, dice en su inciso a) que no podrán adoptar quienes no hayan cumplido treinta años de edad, salvo los cónyuges que tengan más de tres años de casados. Propongo que a continuación se agregue lo siguiente: "Aun por debajo de este término podrán adoptar los cónyuges que acrediten la imposibilidad de tener hijos".

Alguien podrá preguntarse cuál es el fundamento de nuestro pedido. Al respecto puedo decir que no hemos consultado a todos pero sí a una gran parte de los veinticuatro jueces de familia de la Capital Federal, quienes nos han comentado que es abundante la cantidad de parejas jóvenes que se casan aun conociendo su imposibilidad de procrear, y que concurren a verlos con la intención de adoptar un niño. En este supuesto, y en el relativo a matrimonios que se enteran de su imposibilidad de procrear como consecuencia de las modernas técnicas existentes, parece justo que se les permita adoptar un niño antes de los tres años de casados, siempre y cuando acrediten de un modo suficiente esa situación ante el juez.

Eso no sólo beneficiará a los niños que estén en condiciones de ser adoptados sino que forti-

ficará el vínculo matrimonial, como naturalmente ocurre cuando un niño se incorpora a un hogar.

La otra modificación que deseo proponer se vincula con el segundo párrafo del artículo 6º. Allí se determina que "la guarda deberá ser otorgada judicialmente por el juez o tribunal del domicilio del menor". Propongo que además del juez del domicilio del menor, que en definitiva es el juez del domicilio de los padres de dicho menor, tenga también competencia el juez que de algún modo hubiese prevenido en una causa relativa a la seguridad del menor.

No escapará al criterio de la comisión que algunas prácticas ilegales llevan a que los recién nacidos sean trasladados desde el lugar de nacimiento —o el domicilio de sus padres—, a otras zonas del país, donde un juez en ejercicio de su jurisdicción puede adoptar medidas en beneficio y seguridad del menor. De modo que a continuación de "por el juez o tribunal de domicilio del menor" propongo que se agregue la siguiente redacción: "o el que estuviere interviniendo en la protección del menor".

Estas son las propuestas que formulo con relación a este capítulo y desde ya pido a los miembros informantes de las comisiones que acepten las sugerencias que he planteado.

Sr. Presidente (Usandizaga). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela. — Señor presidente: destaco el excelente trabajo realizado por las comisiones que han intervenido en el tratamiento de este tema por entender que se ha alcanzado una brillante síntesis de una cuestión tan compleja como la que representa la ley de adopción.

También expreso que comparto plenamente los argumentos vertidos por el miembro informante, el señor diputado Dumón, las palabras pronunciadas por la señora diputada Roy y lo expuesto por quienes han hablado posteriormente.

Mi intervención es a los efectos de proponer una modificación con relación al artículo 4º, destacando que resulta ser una copia casi textual del homónimo de la ley 19.134 del año 1971, circunstancia que indica que no ha sido modificado sustancialmente el artículo contenido en el proyecto sometido a nuestro análisis.

El artículo 4º sustentaba el criterio de limitar la adopción a las familias que no tuviesen hijos o que tuviesen pocos hijos. De allí que el primer párrafo de ese artículo 4º expresara: "La existencia de descendientes, legítimos o no del adoptante, no impide la adopción pero en tal caso aquellos podrán ser oídos por el juez o tri-

bunal, si lo considerasen necesario y fuesen mayores de ocho años". Hasta allí en nada se contradice con los argumentos y las fundamentaciones dadas respecto de esta ley. Pero el segundo párrafo determinaba lo siguiente: "Ello no obstante, cuando existiere más de un hijo legítimo, o más de un hijo adoptivo, solo podrá acordarse la adopción con carácter de excepción, estableciéndose en la sentencia que la acuerde, que beneficie al menor adoptado y no crea perjuicios al núcleo familiar del adoptante".

El artículo 4º que se propone mantiene casi textualmente este párrafo, con la supresión de las palabras "con carácter de excepción".

Este segundo párrafo es una rémora de los conceptos sostenidos allí por el año 1971, que no son precisamente los fundamentos que actualmente se tienen en cuenta con respecto al proyecto de ley en discusión. Establecer que sólo podrá acordarse la adopción consignándose en la sentencia que este hecho beneficia al menor adoptado y no crea perjuicios al núcleo familiar del adoptante, constituye un acto de materialidad que si bien podría ser viable en 1971, evidentemente hoy contrasta con el contenido global de la norma que consideramos y con los fundamentos expuestos por los señores diputados. Se trata de un concepto de materialidad porque de ninguna manera es aceptable que en la sentencia se consigne el hecho de que la adopción beneficia al menor, toda vez que si no lo beneficiase ella no sería concluyente por el juez.

Por otro lado, también resulta inadmisible aceptar que en la sentencia se consigne que la adopción no crea perjuicios al núcleo familiar del adoptante; ésta es otra cuestión de materialidad y no de afecto, de amor y de integridad en la necesidad de adopción, desde el punto de vista del carácter tutivo que este instrumento tiene hacia el menor adoptado.

Por las razones expuestas, teniendo en cuenta a la vez la distancia que existe entre los criterios sustentados en 1971 y los fundamentos del proyecto de ley en consideración, sugiero que se elimine el párrafo que en el artículo 4º comienza diciendo: "Cuando existiere más de un hijo biológico...".

Sr. Presidente (Usandizaga).— Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasciti.— Señor presidente: voy a proponer a la comisión una modificación gramatical en el texto del inciso a) del artículo 7º.

Ese inciso se refiere a la obligación que tiene el juez de citar a los padres del menor a fin de que presenten su consentimiento para

el otorgamiento de la guarda, y como excepción establece que la citación no será necesaria cuando el menor estuviere en un establecimiento. Por tratarse de una excepción, entiendo que ésta debe ser inequívoca y estar perfectamente aclarada; las palabras "en un establecimiento" son poco claras. En consecuencia, propongo que sean reemplazadas por la expresión: "internado en un establecimiento asistencial"; ello, para evitar cualquier duda de interpretación.

Sr. Presidente (Usandizaga).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia.— Señor presidente: la Comisión de Justicia, que presido, fue la última en examinar este proyecto de ley. Allí se hicieron algunas consideraciones por parte de los señores diputados Gallo, Arias y Orquín —el último de los cuales ha realizado trabajos de importancia en torno de este tema— pero, no obstante ello, se resolvió no perjudicar el tratamiento de un asunto que ya venía con dictamen de dos comisiones. En consecuencia, se aprobó el despacho, haciendo mención algunos señores diputados en el sentido de que en el recinto plantearían observaciones en particular.

El artículo 1º, cuya lectura recomiendo que se haga en forma cuidadosa pues por lo menos la copia que obra en mi poder contiene evidentes errores de transcripción, dispone la adopción de menores no emancipados por sentencia judicial. Pero en una segunda parte se refiere a la adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado, mencionándose las circunstancias en que puede otorgarse. Quiere decir que en el primer caso se establece la forma de otorgar la adopción, y en el segundo las circunstancias para un mayor de edad o un menor emancipado. Me parece que se trata de dos cuestiones inconciliables, que no pueden pertenecer a un mismo texto legal.

Quizá la comisión ya trató este punto y tiene una explicación para esta redacción que a mi juicio es técnicamente defectuosa.

Sr. Presidente (Usandizaga).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castro.— Señor presidente: en el segundo párrafo del artículo 2º se exige que el adoptante sea por lo menos dieciocho años mayor que el adoptado, y en el artículo 9º también se plantea una exigencia respecto de los cónyuges en el sentido de que deben adoptar en forma conjunta. En este punto se plantea un problema. Si en un matrimonio uno de los cónyuges cumple con el requisito de la diferencia de dieciocho años con el adoptado y el otro no, de acuerdo con el texto del proyecto

incluso el que es dieciocho años mayor que el adoptado no estaría en condiciones de adoptar.

Por lo expuesto sugiero que el último párrafo del artículo 2º quede redactado del siguiente modo: "El adoptante debe ser por lo menos dieciocho años mayor que el adoptado salvo cuando el cónyuge superviviente adopta al hijo adoptado del premuerto o cuando los adoptantes sean cónyuges y uno de ellos no alcance esa diferencia."

Sr. Presidente (Usandizaga).— Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Dumén.— Señor presidente: con respecto a la objeción planteada por el señor diputado Durañona y Vedia, a juicio de la comisión la redacción es correcta porque lo que plantea el artículo 1º es el acotamiento de la voluntad del adoptado. En la primera parte no se había del consentimiento, y en el segundo párrafo se da cabida como excepción al consentimiento para el caso del hijo del cónyuge del adoptante o para cuando exista estado de hijo del adoptando desde antes de los catorce años de edad. De manera que en este punto la comisión mantiene el texto propuesto.

En relación con el artículo 2º —tal como hace instantes me lo recordaban algunos miembros de la comisión— puede darse el supuesto de que una persona de 40 años se case con una de 18 y en virtud de esta norma adopte a un individuo de 16 o 17 años. Resulta evidente que al no existir diferencia de edad se presenta un elemento perturbador en la constitución del nuevo núcleo familiar.

Es correcta la interpretación formulada por el señor diputado Varela con respecto al artículo 4º, que podría aparecer como una rémora, ya que el interés del menor está contemplado —entre otros— en el artículo vinculado con la guarda y la adopción. En virtud de ello aceptamos la sugerencia del señor diputado en el sentido de eliminar el párrafo que dice: "Cuando existiere más de un hijo biológico o más de un hijo adoptivo sólo podrá acordarse la adopción estableciéndose en la sentencia que la acuerde que beneficia al menor adoptado y no crea perjuicios al núcleo familiar del adoptante".

Aceptamos la propuesta formulada por el señor diputado Gallo en el sentido de agregar en el inciso a) del artículo 5º: "Aun por debajo de este término podrán adoptar los cónyuges que acrediten la imposibilidad de tener hijos."

Aclaro que este tema originó un profundo debate en la comisión ya que con los adelantos de la técnica esta prueba es de difícil producción, pero si existiera este supuesto, no quere-

mos dejar un solo espacio de duda a efectos de facilitar la adopción en beneficio de los menores.

Después de meditar y debatir la objeción formulada al párrafo segundo del artículo 6º —y también luego de consultar a los señores funcionarios que en este momento se encuentran presentes en el recinto—, consideramos que no es viable porque puede dar lugar a un mal manejo de órganos judiciales que no conocen el origen o los antecedentes delictivos. Además, el hecho de alejarlos del domicilio facilitaría la acción delictiva tipificada como robo de menores, y no es nuestra intención abrir ninguna compuerta en este sentido, no obstante comprender la inteligencia con que la objeción fue planteada.

Con respecto a la propuesta formulada por el señor diputado Pernasotti, no tenemos inconveniente en agregar en el inciso a) del artículo 7º luego de la palabra "establecimiento" el término "asistencial".

Sr. Presidente (Usandizaga).— Se va a votar el capítulo I, que comprende los artículos 1º a 11, con las modificaciones aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Usandizaga).— En consideración el capítulo 2, que comprende los artículos 12 a 17.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Dumén.— Señor presidente: aclaro que por un error de tipeo en el artículo 16, donde dice "el reconocimiento del adoptante" debe leerse: "el reconocimiento del adoptado".

Sr. Presidente (Usandizaga).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gallo.— Señor presidente: solicité la palabra no sólo para realizar una observación sino también para pedir una inclusión. El hecho de que varios señores diputados hayan propuesto agregados a muchos de los artículos incluidos en el capítulo I motiva que no quede claro cuáles son verdaderamente las modificaciones aceptadas y cuáles son los textos definitivos.

En tal sentido solicito una aclaración previa al señor diputado Dumén para saber cuáles son las modificaciones aceptadas y la redacción de los distintos artículos para evaluar si corresponde formular una moción de reconsideración.

Sr. Presidente (Usandizaga).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Dumén.— Si bien los taquígrafos lo han recogido y también se ha tomado nota por Se-

cretaría, no tengo inconvenientes en enunciar las modificaciones producidas.

Por intermedio de la Presidencia solicito se disponga elevar el volumen que se logra a través de mi micrófono porque supongo que el señor diputado Gallo no me debe escuchar bien.

Los artículos 1º y 2º permanecen sin modificaciones. Se elimina la última parte del artículo 4º, es decir, la oración que comienza: "Cuando existiere..."

En el inciso a) del artículo 5º, a continuación de "...tres años de casados.", se agrega: "Aun por debajo de este término podrán adoptar los cónyuges que acrediten la imposibilidad de tener hijos".

El segundo párrafo del artículo 6º permanece sin modificaciones.

En el segundo párrafo del inciso a) del artículo 7º, a continuación de "...en un establecimiento" se agrega la palabra "asistencial".

El artículo 9º no sufre modificaciones.

Sr. Presidente (Usandizaga). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gallo. — Señor presidente: me referiré al capítulo 2.

La disidencia que firmáramos nos lleva a proponer una modificación al artículo 12. En su primera parte este artículo establece que la adopción plena confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen.

En tal sentido, considero que se incurre en una confusión en virtud de la cual se establece una diferencia con relación a la adopción del hijo del cónyuge. Se me ha explicado que en este último caso tan sólo cabe la adopción simple. Ahora bien, ¿por qué no admitir la adopción plena, que se vería impedida con este texto?

Si se cortan todos los vínculos con la familia de origen se impediría la adopción plena del hijo del cónyuge. De esta manera se podría dar el caso de un matrimonio al cual uno de los cónyuges concurre con un hijo y del que nace un hijo común, estableciéndose situaciones biológica y jurídicamente diferentes entre ellos, ya que el hijo del cónyuge sólo es pasible de adopción simple.

Por ello es que habría que establecer una excepción para que la ruptura de vínculos no ocurra en el caso de la adopción del hijo del cónyuge.

A tal efecto propongo que a continuación de "la adopción plena confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen", se agregue: "sin perjuicio de la subsistencia del vínculo

lo que con la familia biológica conforma el hijo adoptivo del cónyuge".

El resto de la redacción no sería modificado.

Sr. Presidente (Usandizaga). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela. — Señor presidente: siguiendo con la línea de razonamiento y de fundamentación expuesta por el señor diputado Dumón pienso que el artículo 15 —que es copia textual del artículo 17 de la ley 19.134— debe ser modificado en dos partes en su redacción gramatical conforme a la filosofía que inspira a esta norma.

La primera parte del artículo 15 —que, reitero, tiene la misma redacción que el artículo 17 de la ley anterior— dice lo siguiente: "El hijo adoptivo llevará el primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto si éste solicita su agregación". Propongo que esta redacción sea modificada de modo tal que el texto sólo diga así: "El hijo adoptivo llevará el apellido del adoptante". De este modo se eliminaría la expresión: "o su apellido compuesto si éste solicita su agregación".

Esta propuesta obedece a que tal como está redactado el artículo 15 queda abierta la posibilidad de que en el caso de tratarse de un apellido compuesto existan diferencias entre el de los hijos biológicos, que llevan, por ejemplo, los dos apellidos del padre, y el del adoptado, que tendría solamente uno, lo cual obviamente provocaría una situación discriminatoria.

Destaco nuevamente que esta redacción viene del antiguo artículo 17, de manera que mi observación no guarda relación con la filosofía ni con el contenido del excelente trabajo realizado por la comisión pertinente. En el ánimo de colaborar con dicha filosofía es que formulo esta propuesta de modificación, que si bien es pequeña puede resultar trascendente a los fines que inspiran a esta norma.

En segundo término solicito que se corrija un error gramatical que ya figuraba en la ley anterior. Se trata de reemplazar la vocal "o" por la conjunción "y" en la segunda oración, que es la que dice: "En caso de que los adoptantes sean cónyuges, a pedido de éstos, podrá agregarse al adoptado el apellido compuesto del padre adoptivo o el de la madre adoptiva". Con la modificación que propongo esta expresión quedaría redactada del siguiente modo: "...podrá agregarse al adoptado el apellido compuesto del padre adoptivo y el de la madre adoptiva".

Estas son las dos sugerencias que pongo en consideración de la comisión.

Sr. Presidente (Usandizaga). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Dumón. — Señor presidente: primero voy a referirme al artículo 12.

En este dictamen —que efectivamente sigue los lineamientos trazados en la ley 19.134— se establecen dos institutos de adopción. Por un lado, la adopción plena, que al decir de Zannoni y Orquín, se trata de un instituto predominantemente emplazatorio. Su característica pasa por sustituir la familia biológica por la familia adoptiva. Esa fuerza conlleva por supuesto la extinción legal del vínculo biológico anterior, en cuanto a sus consecuencias legales, con excepción de los impedimentos matrimoniales. Esto de ninguna manera se vincula con algo que este dictamen trata especialmente, y a lo que hoy hacía referencia la señora diputada Irma Roy, como es el conocimiento del origen biológico. Lo que nosotros estamos tratando es otro efecto: la superposición de vínculos.

Por eso es que el otro instituto —el de la adopción plena—, de naturaleza revocable, mucho más contractual en su base, que tiene en cuenta otras características, limita los efectos de la adopción al vínculo con el adoptante, exclusivamente. La adopción simple le permitirá al adoptado mantener vínculos con su abuelo biológico.

Entonces, por las razones expuestas, la comisión mantiene la redacción original.

Voy a referirme ahora a la objeción del señor diputado Varela en cuanto al artículo 15. En primer lugar, debemos distinguir si estamos hablando de apellido doble o de apellido compuesto. Una cosa es que yo use el apellido de mi madre y entonces me llame Dumón Basterrechea, y otra cosa es que me llame Ortega y Gasset. Son dos tipos de apellidos diferentes.

Nosotros entendemos lo que plantea el señor diputado, y en ese sentido me parece que la ley quedará más clara. Pero la inteligencia fue la de tomar el primer apellido o el apellido compuesto.

De cualquier manera nos parece conveniente mantener el texto del primer apellido del adoptante. Lo que si nos parece que debemos aceptar es el cambio de la "o" por la "y", en la frase que dice: "...el apellido compuesto del padre adoptivo o el de la madre adoptiva...".

En lo demás la comisión mantiene la redacción original.

Sr. Presidente (Usandizaga). — Se va a votar el capítulo 2, que comprende los artículos 12

a 17, con la modificación aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Usandizaga). — En consideración el capítulo 3, que contiene los artículos 18 a 25.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los capítulos 4 (artículos 26 y 27) y 5 (artículos 28 y 29).

Sr. Presidente (Usandizaga). — En consideración el capítulo 6, que comprende los artículos 30 a 32.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: quiero señalar la necesidad de una corrección en la redacción del artículo 30. En dicho artículo se hace referencia al artículo 7º, cuando en realidad debería ser al artículo 6º.

Sr. Presidente (Usandizaga). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Dumón. — Señor presidente: el señor diputado ha apuntado con acierto; se trata simplemente de un error de tipeo; debe decir "artículo 6º".

Sr. Presidente (Usandizaga). — Se va a votar el capítulo 6º con la salvedad hecha por la comisión.

—Resulta afirmativa.

—El artículo 32 es de forma.

Sr. Presidente (Usandizaga). — Queda sancionado el proyecto de ley ¹. (*Aplausos prolongados en las bancas y galerías.*)

Se comunicará al Honorable Senado.

Solicito a la Honorable Cámara que se expida sobre una solicitud de inserción de quien habla.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Usandizaga). — Queda autorizada la inserción solicitada ².

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 2210.)

² Véase el texto de la inserción en el Apéndice. (Página 2212.)

B. INSERCIONES

Insertión solicitada por el señor diputado Usandizaga

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre régimen de adopción.

La ley 23.204, de modificación al régimen de patria potestad y equiparación de hijos matrimoniales y extra-matrimoniales, la posterior 23.515 sobre reforma al régimen de matrimonio civil e incorporación del divorcio vincular, y la sanción por esta Cámara, en 1993, del proyecto de ley de unificación de la legislación civil y comercial, introdujeron sustanciales cambios al derecho de familia y sucesiones vigente en nuestro país.

Ello se complementa ahora con el tratamiento de un proyecto de ley de adopción, que intenta reformular el conjunto de normas que componen la ley 19.134 y sus modificatorias (leyes 23.264 y 23.515).

Sobre el particular deseamos rescatar los antecedentes que permitieron llegar a esta instancia en la labor parlamentaria.

Desde 1983 a la fecha se sucedieron numerosos proyectos de ley de modificación del régimen de adopción, entre los que cabe mencionar los de autoría de los di-

putados (m.c.) Unánime (571-D.-83), María Grilina Guzmán (1.037-D.-93), María Florentina Gómez Miranda (3.497-D.-85), C. E. Ferré (2.829-D.-83), Roberto Irigoyen y M. F. Gómez Miranda (2.818-D.-89).

Asimismo, las comisiones de Legislación General y de Familia, Mujer y Minoridad se esforzaron en esos años en la búsqueda de un consenso que permitiera la sanción de un texto único, compatibilizador de las diferentes iniciativas.

En ese sentido, se arribó al Orden del Día Nº 1.483 de 1989 —no tratado por esta Cámara—, y reproducido por el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación General y de Familia, Mujer y Minoridad en su composición de 1990-1991. Dicho texto legislativo se traduce con posterioridad en el proyecto de ley presentado por los diputados Gabriela González Gass, Luis González, Alfredo Bravo, Rodolfo Parante y Mabel Gómez Marelli (expediente 394-D.-92).

La intensa labor desarrollada en el tema, con la participación de especialistas multidisciplinarios y asesores

de esta Cámara, proponía un régimen legal que, al igual que el que nos ocupa, priorizaba la protección del menor por encima de todo otro valor: dar padres al menor desamparado o abandonado fue la premisa, rechazando toda consideración del instituto como un exclusivo medio de satisfacer paternidades imposibles.

La técnica legislativa elegida en dichas propuestas, fue la incorporación de las normas al Código Civil: derogación de la ley 19.134 y la inclusión de las disposiciones que regulan el régimen de adopción al Código Civil, en el título IV del libro I (artículos 311 a 323), antes dedicados a la legitimación, y en el título V del libro I (artículos 324 a 344), antes dedicado a los hijos naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos, disposiciones todas derogadas por la ley 23.264. Se incluían disposiciones en el título XIV del ministerio público de menores, así como en el título IX del libro IV, referido al orden de las sucesiones intestadas; también se proponían modificaciones a algunas disposiciones de la ley 18.248 de nombre de las personas.

Entre las normas que diferencian ese proyecto del que se encuentra en tratamiento en esta oportunidad, creemos útil comentar, al solo efecto de colaborar con futuras tareas de interpretación y estudio, las siguientes:

— La mínima diferencia de edad entre adoptante y adoptado deja de pertenecer a su familia biológica y

— La edad para adoptar se fijaba en veinticinco años.

— Se incorporaba el instituto denominado "estado de adoptabilidad", cuya caracterización se definía con claridad en los fundamentos que acompañaban el proyecto de ley de los diputados Gabriela González Gass y otros (394-D-92, T.P. Nº 11 del 13 de mayo de 1992, página 884): "instituto destinado a resolver los casos de los menores en estado abandonado, por haber sido confiados a establecimientos públicos o privados de protección de menores y haberse desentendido injustificadamente los padres de sus deberes paternos durante el plazo que la autoridad judicial estime, no debiendo ser inferior a tres meses, o cuando el desamparo moral y material del menor resulte evidente y sea comprobado por la autoridad judicial, o cuando son los padres quienes manifiestan ante la autoridad judicial competente su voluntad de dar su hijo en adopción. En estos tres

supuestos... el juez debe citar bajo pena de nulidad a los padres a una audiencia, a fin de evaluar las circunstancias del caso. Finalmente, recogiendo una norma de la legislación francesa, este estado de adoptabilidad no prospera cuando algún miembro de la familia pide hacerse cargo del menor y la petición es favorable al interés del mismo, preservando así el ámbito familiar originario del menor en estado abandonado".

Se incorporaba una disposición general con respecto a las unidades relativas considerándose tales las "... declaradas por el juez o tribunal teniendo en consideración el interés protegido de quien interpone la acción. El juez o tribunal debe convalidar la adopción si dicho interés se opone al interés del adoptado".

Por último, se avanzaba en normas de derecho internacional privado en cuanto a ley aplicable, jurisdicción y efectos de la adopción conferida en el extranjero:

a) La ley del domicilio del adoptado rige la capacidad, el consentimiento y demás requisitos para ser adoptado como también los procedimientos, las formalidades conducentes a la constitución del vínculo y sus efectos, la capacidad para adoptar y los demás requisitos para ser adoptante. Los requisitos para la publicidad y registro de la adopción quedan sometidos a la ley del Estado donde se exige su cumplimiento;

b) El juez o tribunal del Estado del adoptando es competente en el otorgamiento de la adopción. Es competente para decidir la nulidad o revocación de la adopción el juez o tribunal del Estado del domicilio del adoptado al momento del otorgamiento de la adopción; o el del actual adoptante y adoptado, a opción del actor;

c) La adopción conferida en el extranjero de conformidad a la ley del Estado del domicilio del adoptado puede convertirse de acuerdo al régimen de adopción regulado en este código, acreditándose dicho vínculo y prestando su asentimiento el adoptante y el adoptado, quien debe ser mayor de edad.

Concluimos esta reseña, de contenido meramente informativo, con la expresión de nuestro apoyo a la sanción del proyecto en análisis, en tanto se trata de una importante modificación al instituto de la adopción, que promueve la judicialidad de todo el procedimiento y protege los intereses del menor.